



Ministerio  
de Economía y Finanzas

CM 383

2026-5-1-0007992

MINISTERIO DEL INTERIOR  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA  
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA  
MINISTERIO DE TURISMO  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 18 JUN. 2026

**Sra. Presidenta de la Asamblea General:**

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, en cuanto a la remisión del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida.

AL/A-MB

## **Exposición de Motivos**

### **1. Introducción**

Durante las últimas décadas, Uruguay ha realizado importantes avances en la consolidación de su estabilidad macroeconómica. El fortalecimiento institucional, la responsabilidad fiscal, la solidez del sistema financiero y la consolidación de una inflación en niveles significativamente más bajos que los observados históricamente constituyen activos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Estos logros han contribuido a generar un entorno de mayor previsibilidad para las familias, los trabajadores y las empresas, fortaleciendo la capacidad del Uruguay para atraer inversiones, generar empleo y enfrentar escenarios internacionales crecientemente complejos e inciertos. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica, siendo una condición necesaria para el crecimiento económico sostenible, no constituye por sí sola una condición suficiente para mejorar la competitividad de la economía ni para elevar el bienestar de la población.

Una vez alcanzados niveles más reducidos y estables de inflación, los desafíos del crecimiento y desarrollo económico se trasladan crecientemente

al ámbito microeconómico. La productividad, la calidad regulatoria, la eficiencia de los procedimientos administrativos, la intensidad de la competencia en los mercados, la capacidad de innovación y la mejora de los instrumentos de captación de ahorro nacional para actividades productivas pasan a desempeñar un papel central en la determinación de los costos de producción, la capacidad exportadora de las empresas y el nivel de vida de los ciudadanos.

La experiencia internacional demuestra que regulaciones más simples, transparentes y eficientes generan beneficios que trascienden a las empresas directamente alcanzadas. La reducción de costos administrativos y regulatorios permite liberar recursos para la inversión productiva, mejorar la productividad y favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Asimismo, mercados más abiertos y competitivos contribuyen a una asignación más eficiente de los recursos, estimulan la innovación y generan incentivos para ofrecer bienes y servicios de mayor calidad a menores precios.

Por tal motivo, la agenda de competitividad constituye también una agenda de reducción del costo de vida. Las medidas orientadas a reducir costos regulatorios redundantes o injustificados, promover la competencia y eliminar costos no sólo fortalecen la capacidad competitiva de las empresas uruguayas, sino que también contribuyen a que los consumidores accedan a una mayor variedad de bienes y servicios, en mejores condiciones de calidad y precio.

La competitividad no debe entenderse únicamente como una cuestión asociada a los precios relativos de la economía. La verdadera competitividad de un país radica en su capacidad para producir más y mejor, innovar, incorporar tecnología, atraer inversión, generar empleo de calidad y aumentar sostenidamente la productividad. Es, en definitiva, la capacidad de crear más valor para la sociedad y traducir ese valor en mayores niveles de bienestar para su población.

El presente proyecto de ley se inscribe dentro de esta visión. Su objetivo es impulsar un conjunto de reformas destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, generar regulaciones más eficientes, simplificar la interacción entre ciudadanos, empresas y Administración, facilitar el comercio exterior, promover la innovación y fortalecer las condiciones para el crecimiento sostenible de la economía uruguaya.

La elaboración del presente proyecto de ley fue el resultado de un amplio proceso de trabajo interinstitucional y diálogo con la sociedad, orientado a identificar obstáculos que afectan la competitividad, la inversión, la innovación y el costo de vida de los uruguayos. A lo largo de este proceso participaron organismos del Poder Ejecutivo, de los gobiernos departamentales, cámaras



2026-5-1-0007992

empresariales, asociaciones profesionales, organizaciones de trabajadores, centros de investigación, consultoras especializadas, actores del ecosistema emprendedor y de innovación, así como organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Asimismo, se realizó con participación directa de funcionarios y equipos técnicos responsables de la gestión y regulación de los distintos sectores involucrados, quienes analizaron los procedimientos bajo su responsabilidad e identificaron oportunidades de simplificación, digitalización, interoperabilidad y mejora regulatoria. Este ejercicio permitió no solo recoger propuestas de los usuarios de la regulación —empresas, profesionales y trabajadores— sino también incorporar el conocimiento práctico de quienes administran los procesos y ejercen funciones de control. Asimismo, se analizaron y consideraron iniciativas legislativas orientadas a mejorar la competitividad del Uruguay y reducir el costo de vida. El resultado es un conjunto de iniciativas construidas sobre la base del diálogo, la evidencia y la experiencia de los distintos actores, que refleja un compromiso compartido con la modernización del Estado, la reducción de cargas administrativas innecesarias y la mejora de la calidad regulatoria.

AL/A-MB

La iniciativa recoge más de un centenar de propuestas surgidas de estos intercambios y se apoya en el compromiso de organismos públicos, reguladores sectoriales y actores privados para revisar prácticas históricas, eliminar duplicaciones, incorporar herramientas digitales y promover una cultura de mejora continua en la gestión pública, con el objetivo de facilitar la actividad económica, fortalecer la competitividad del país y generar mejores condiciones para el crecimiento, la inversión y el empleo. Durante el proceso de organización de la información, se identificaron decenas de oportunidades de mejora que se entendió que no eran materia de ley sino de reglamentaciones de jerarquía inferior y que, en conjunto con las decenas de reglamentaciones necesarias para la implementación que determinará la ley en caso de aprobarse, crean un ambicioso programa de trabajo para promover una regulación más eficiente que redunde principalmente en menores costos para las MiPyMes, menor costo de vida para la población y mejor clima de negocios.

El proyecto de ley se organiza en cuatro capítulos, cada uno con sus correspondientes secciones. En el primero se establecen medidas de simplificación regulatoria y aceleración de trámites. En primer lugar, se definen mecanismos para la agilización de trámites y un programa de calidad regulatoria cuyo fin es la efectiva implementación de estos mecanismos en trámites concretos. Este programa funcionará coordinado desde el Ministerio de Economía y Finanzas y, junto con el órgano competente y a partir de las oportunidades de mejora identificadas por el sector privado, analizará en Mesas Resolutivas para la Modernización Regulatoria oportunidades concretas para implementar los mecanismos de agilización de trámites, tales como la declaración jurada, plazos máximos de resolución, el silencio positivo, el reconocimiento de certificaciones del exterior y la posibilidad de iniciar

trámites paralelos. Además, se crean o fortalecen plataformas de interoperabilidad para evitar las duplicaciones en varios aspectos de la vida de las empresas, tales como los representantes y apoderados para realizar trámites, los estados financieros, la información para la evaluación del riesgo crediticio, los trámites portuarios y la cadena cárnica. Dentro de esta sección, el proyecto de ley promueve la articulación con las regulaciones existentes a nivel departamental, como por ejemplo es el caso de las bromatológicas o los permisos de construcción. Adicionalmente, este capítulo contiene disposiciones que apuntan a simplificar trámites en varios sectores de la economía tales como la industria de bebidas, la industria asociada a la construcción, la minería, los productos forestales, la pesca, los cosméticos, productos domisanitarios y de tecnología médica.

El segundo capítulo agrupa propuestas de mejoras asociadas con la agenda de facilitación de comercio. Se crea el autodespacho aduanero, por el cual las empresas que cumplan con condiciones de idoneidad podrán realizar para sí mismas los trámites de exportación e importación, con condiciones equivalentes a las que les aplican a los despachantes de aduana. El ejecutivo se compromete a revisar la forma de cobrar todas las tasas asociadas a servicios que se aplican al comercio exterior para adoptar las prácticas internacionales en la materia, consagra la sustitución de la intervención previa de la Dirección General Impositiva por intervención ex post, fortalece el análisis basado en riesgo, elimina prohibiciones que actualmente carecen de sentido, como la de importar camiones usados, y ajusta normativa para habilitar el diferimiento en el cobro de tributos en el comercio exterior.

El tercer capítulo concentra los cambios asociados a promover una mayor competencia en los mercados para reducir el costo de vida. La primera parte está dedicada a fortalecer la institucionalidad de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, convirtiéndola en un servicio descentralizado. Adicionalmente se separan las funciones investigativa y decisoria, creando el cargo de Director de Investigaciones. En materia de análisis de concentraciones, al tiempo que se redefinen los umbrales para hacerlos más bajos, se crea una tasa por el análisis de concentraciones, una práctica largamente utilizada en el mundo que permite fortalecer las capacidades de la comisión y la agilización y precisión de sus investigaciones. La sección de reforma de la Comisión concluye con el fortalecimiento de las capacidades investigativas, a partir de la definición de un programa de clemencia y la posibilidad de priorizar casos de impacto. Este capítulo propone varias disposiciones procompetitivas en mercados regulados. Por ejemplo, a partir de la simplificación de la información exigida al segundo registrante de un producto, se habilitará la competencia intramarca lo que redundará en mejores precios para productos básicos de la canasta de consumo. Finalmente, el capítulo propone la obligatoriedad de que las grandes superficies minoristas y el comercio digital publiquen sus precios de venta al público por unidad, a los efectos de que los consumidores tengan mejor información para la toma de



2026-5-1-0007992

decisiones. Estas medidas procompetitivas están orientadas a la reducción del costo de la canasta básica de consumo de la población.

El cuarto capítulo define instrumentos para la financiación a la innovación y el desarrollo de las MiPyMes. Estas son las principales generadoras de empleo en el país y en ellas están focalizadas la mayoría de las medidas. Se proponen cambios tributarios para acompañar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, a los efectos de que un buen desempeño económico no suponga un desafío en materia de formalización. Adicionalmente, se proponen dos plataformas para la simplificación de trámites de las MiPyMes. En primer lugar, la gestión integrada de los trámites de DGI y BPS en una plataforma. Segundo, se desarrollará de forma gratuita un sistema integrado de facturación electrónica. Finalmente, las MiPyMes que operan en mercados sometidos a vigilancia sanitaria gozarán de una reducción en el costo de los registros, que hoy opera como una barrera a la inversión, al desarrollo y al acceso a canales formales de distribución. Este capítulo contiene asimismo varias disposiciones orientadas a desarrollar los mercados financieros a partir de dos tipos de iniciativas. Por un lado, estimulando la innovación en la oferta a partir de entornos controlados de prueba donde se puedan probar nuevas soluciones financieras sin riesgo sistémico, de forma temporal y acotada. Además, se propone el desarrollo de un modelo de finanzas abiertas donde las personas tengan más libertad para realizar inversiones a partir de sus cuentas bancarias tradicionales. De forma de estimular la oferta, se propone la creación de fondos de inversión cerrados promovidos que tendrán tratamiento tributario favorable y se fortalecen las plataformas de financiamiento colectivo. Finalmente, este capítulo concluye con medidas para estimular el desarrollo de varios sectores y para mejorar la relación entre la investigación y la inversión en innovación.

AL/A-MB

## **2. Disposiciones efectivas de cada capítulo**

### **Capítulo 1. Agilización de trámites**

#### **2.1) Principios, mecanismos de agilización, programa de calidad regulatoria y buenas prácticas (artículos 1 a 9)**

La primera sección de la propuesta de ley incorpora criterios modernos de calidad regulatoria, gestión basada en riesgos y mejora continua en el diseño e implementación de los procedimientos administrativos vinculados al desarrollo de actividades económicas. A tales efectos, se establecen principios orientados a promover una regulación más eficiente, proporcional y previsible, reduciendo cargas administrativas innecesarias y favoreciendo una mejor utilización de los recursos públicos.

Asimismo, propone dotar a la Administración de herramientas que permitan simplificar y agilizar la tramitación administrativa, incorporando mecanismos tales como las declaraciones juradas, los silencios positivos, las



comunicaciones previas, la tramitación paralela de autorizaciones, el reconocimiento de evaluaciones realizadas por terceros y reglas claras en materia de plazos de resolución. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento regulatorio, reducir tiempos y costos de gestión, y concentrar los esfuerzos de control estatal en aquellos ámbitos donde existen mayores riesgos o impactos potenciales.

Como complemento de estas herramientas, se propone la creación del Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites, con el cometido de promover una revisión permanente de los procedimientos administrativos, impulsar procesos de simplificación, fortalecer la interoperabilidad entre organismos públicos y generar espacios de coordinación entre reguladores, usuarios y actores relevantes de cada sector. De esta forma, se procura consolidar una política pública permanente de mejora regulatoria que contribuya a la modernización del Estado, al fortalecimiento de la competitividad y a la reducción de costos innecesarios para ciudadanos y empresas, preservando plenamente los objetivos de interés público y los estándares técnicos, sanitarios, ambientales y de protección de los consumidores.

## **2.2) Plataformas de interoperabilidad (artículos 10 a 28)**

La reducción de costos regulatorios y administrativos constituye uno de los instrumentos más efectivos para mejorar la competitividad de la economía, facilitar la actividad empresarial y mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado. En los últimos años, Uruguay ha desarrollado importantes capacidades institucionales y tecnológicas en materia de gobierno digital, interoperabilidad y transformación de los servicios públicos, posicionándose como uno de los países más avanzados de la región en esta materia.

Un hito relevante en este proceso fue la aprobación del Decreto N° 353/023, de 9 de noviembre de 2023, reglamentario del artículo 76 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, el cual estableció obligaciones específicas para los organismos públicos orientadas a simplificar trámites, eliminar la solicitud de certificados, constancias y documentación que pueda obtenerse por medios electrónicos, promover el intercambio de información entre entidades públicas y fortalecer el uso de herramientas digitales en la gestión administrativa. Asimismo, la normativa consolidó el principio según el cual los ciudadanos y las empresas no deben ser obligados a presentar información que ya obra en poder del Estado.

Dicho marco normativo representó un avance significativo en la construcción de un Estado más integrado y orientado al usuario. Sin embargo, la experiencia de implementación demuestra que aún subsisten importantes oportunidades para profundizar estos principios en sectores específicos donde persisten duplicaciones de controles, fragmentación de registros,



2026-5-1-0007992

exigencias documentales redundantes y limitaciones para el intercambio eficiente de información.

Las medidas incluidas en esta sección procuran precisamente avanzar en esa dirección. A través de mecanismos de interoperabilidad, reconocimiento mutuo de actuaciones administrativas, digitalización de procesos, reutilización de información ya validada por organismos públicos y fortalecimiento de plataformas tecnológicas existentes, se busca reducir costos de cumplimiento para ciudadanos y empresas, mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la transformación digital del Estado.

- **Registro y reutilización de poderes y representaciones (artículo 10)**

Un alto costo administrativo que enfrentan ciudadanos y empresas en su interacción con el Estado deriva de la necesidad de acreditar reiteradamente su representación jurídica ante cada uno de los organismos públicos. En la actualidad, una misma persona física o jurídica puede verse obligada a presentar en múltiples oportunidades los mismos poderes y documentos de representación para realizar trámites ante diversas dependencias de la Administración, aun cuando dicha información ya haya sido previamente verificada por otro organismo estatal.

AL/A-MB

Esta situación genera costos innecesarios para los administrados, incrementa los tiempos de tramitación, produce duplicaciones de controles y obliga a destinar recursos públicos a la revisión repetida de documentación sustancialmente idéntica. A su vez, dificulta la digitalización integral de los procedimientos administrativos y limita el aprovechamiento de la información ya disponible en poder del Estado.

La problemática resulta particularmente relevante para las empresas pequeñas, que frecuentemente deben acreditar la representación de directores, administradores, apoderados y representantes legales ante distintos organismos reguladores, recaudadores o de control.

La transformación digital del Estado brinda la oportunidad de avanzar hacia un modelo basado en el principio de presentación única de la información, según el cual los datos y documentos que ya han sido aportados y validados por una entidad pública pueden ser reutilizados por otros organismos para el ejercicio de sus respectivas competencias. Este enfoque permite reducir cargas administrativas sin afectar las garantías jurídicas que justifican la existencia de los mecanismos de acreditación de representación.

El artículo comprendido en esta sección establece un sistema que permita registrar y validar de forma centralizada los poderes, representaciones y demás documentos habilitantes para actuar ante la Administración.



- **Centralización de Estados Financieros (artículo 11)**

La disponibilidad de información financiera confiable y estandarizada constituye un insumo esencial para el adecuado funcionamiento de los organismos públicos, la supervisión económica, la formulación de políticas públicas y el desarrollo de actividades empresariales. Sin embargo, en la actualidad las sociedades comerciales en Uruguay deben preparar y presentar sus estados financieros con distintos niveles de alcance, formatos, plazos y canales para cumplir con requerimientos de múltiples organismos públicos y entidades privadas, entre ellos la Dirección General Impositiva, la Auditoría Interna de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Banco de Seguros del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, la Dirección Nacional de Zonas Francas, la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco Central del Uruguay, así como bancos e instituciones financieras.

En este contexto, el Registro de Estados Contables administrado por la Auditoría Interna de la Nación se configura como un repositorio oficial, centralizado y suficiente para fines de publicidad contable, control y acceso a la información financiera por parte de los organismos públicos. Resulta conveniente avanzar hacia un modelo en el cual dicho registro sea reconocido como fuente única válida de información financiera para el Estado, evitando la reiteración de presentaciones de documentación ya disponible en la Administración.

El artículo 11 del proyecto procuran consolidar este proceso mediante la centralización de la información financiera y el fortalecimiento de la Central de Balances Electrónica, sobre la base de tres lineamientos fundamentales.

- **Ventanilla Única Marítima (artículos 12 a 18)**

La actividad marítima y portuaria constituye un pilar estratégico para el desarrollo económico del país, tanto por su relevancia para el comercio exterior como por su papel en la inserción logística regional e internacional del Uruguay. La eficiencia, coordinación y modernización de los procedimientos administrativos vinculados al arribo, permanencia y salida de buques son elementos fundamentales para consolidar y fortalecer la conectividad marítima del Uruguay con el mundo, y como consecuencia, robustecer la competitividad del sistema portuario nacional, consolidar la posición del país como plataforma logística regional y mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior.

Los procedimientos asociados a la actividad marítima de arribo, estadía y salida de buques requieren actualmente la intervención de múltiples organismos públicos, cada uno con sus propios sistemas, procedimientos,



2026-5-1-0007992

canales de comunicación y distintos soportes en papel o digital. Esta fragmentación genera duplicaciones de información, mayores costos de cumplimiento para los operadores, dificultades de coordinación institucional y demoras en la gestión de los trámites, que se pretenden evitar, simplificar, coordinar e informatizar con este proyecto de Ventanilla Única Marítima.

Asimismo, Uruguay es Estado Parte del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (Convenio FAL) de la Organización Marítima Internacional (OMI), cuyo objetivo es reducir formalidades, simplificar procedimientos y armonizar los requisitos aplicables al tráfico marítimo internacional. Este acuerdo impulsa la implementación de sistemas de Ventanilla Única Marítima para el intercambio electrónico de la información exigida a los buques y a los distintos operadores intervinientes. Estas disposiciones impulsan un cambio estructural en la gestión de la información marítima basado en la presentación única de datos, la reutilización de la información por las distintas autoridades públicas y la interoperabilidad de los sistemas, con el objetivo de reducir cargas administrativas, evitar duplicaciones, mejorar la trazabilidad y fortalecer la seguridad de las operaciones.

AL/A-MB

En el plano nacional, Uruguay cuenta con una experiencia consolidada en materia de digitalización y facilitación del comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), creada por la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013. La VUCE se ha consolidado como una herramienta eficaz para la articulación interinstitucional, la simplificación de trámites y la prestación de servicios electrónicos, lo que la convierte en la plataforma idónea para asumir la coordinación y operación de una Ventanilla Única Marítima.

Los **artículos 12 a 18** del proyecto tienen por objeto crear la Ventanilla Única Marítima (VUM) como sistema nacional para la gestión electrónica integrada de los trámites vinculados al arribo, permanencia y salida de buques. La VUM se concibe como un punto único de entrada para la presentación, intercambio y gestión de información, sin alterar las competencias, potestades de control ni responsabilidades sustantivas que la normativa vigente asigna a cada uno de los organismos intervinientes.

La iniciativa no modifica los regímenes jurídicos aplicables a los distintos puertos ni los procedimientos sustantivos de autorización y control actualmente vigentes. Su finalidad consiste en ordenar, integrar y coordinar la gestión de la información, facilitando su circulación entre organismos competentes y evitando la multiplicidad de presentaciones por parte de los operadores, en beneficio de la eficiencia administrativa y del comercio marítimo.

En materia de gobernanza, se establece que la VUM funcionará en el ámbito de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) administrada por el Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, Uruguay XXI. Esta solución permite aprovechar capacidades institucionales, tecnológicas y normativas ya existentes, evitando la creación de estructuras paralelas y asegurando una implementación eficiente y sostenible. En consecuencia, se encomienda a la VUCE el diseño, desarrollo, implementación, administración y evolución de la nueva plataforma.

Asimismo, se prevé la posibilidad de constituir un Comité Marítimo Asesor de carácter consultivo, integrado por representantes de organismos públicos y actores privados vinculados a la actividad marítima y portuaria. Este ámbito tendrá como finalidad fortalecer la coordinación institucional, facilitar el intercambio de experiencias y promover la mejora continua del sistema.

El proyecto reconoce la diversidad de regímenes portuarios existentes en el país, incluyendo puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos, infraestructuras bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y terminales portuarias ubicadas en zonas francas. Por tal motivo, se prevé una implementación gradual de la VUM, permitiendo adaptar los tiempos y modalidades de incorporación de trámites a las particularidades institucionales y operativas de cada ámbito, sin afectar la obligatoriedad del sistema para aquellos procedimientos que sean incorporados al mismo.

- **Interoperabilidad para la evaluación del riesgo crediticio (artículo 19)**

El acceso al financiamiento constituye uno de los principales determinantes de la inversión, la actividad empresarial y el crecimiento económico. Sin embargo, el funcionamiento eficiente de los mercados de crédito depende de la disponibilidad de información confiable, actualizada y verificable que permita a las instituciones financieras evaluar adecuadamente el riesgo asociado a cada solicitante.

La existencia de asimetrías de información dificulta la correcta valoración del riesgo crediticio, incrementa los costos de evaluación, restringe el acceso al financiamiento para personas y empresas con buen comportamiento de pago y reduce la competencia entre oferentes de crédito. Estas dificultades resultan particularmente relevantes para pequeñas y medianas empresas, nuevos emprendimientos y personas con escaso historial financiero tradicional.

En los últimos años, el Estado uruguayo ha avanzado significativamente en la digitalización de sus registros y en el desarrollo de mecanismos de interoperabilidad entre organismos públicos a través de la Plataforma de Interoperabilidad administrada por AGESIC. Asimismo, distintos organismos



2026-5-1-0007992

y entidades públicas cuentan con información relevante y actualizada sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de personas físicas y jurídicas, constituyendo un insumo valioso para la evaluación del riesgo crediticio y la prevención del fraude.

En este contexto, el proyecto propone habilitar el acceso, con el consentimiento expreso del titular cuando corresponda, a información proveniente de organismos públicos y entidades relevantes, tales como la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, las cajas paraestatales, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, empresas públicas como UTE, OSE y Antel, así como otras fuentes de información pública que la reglamentación determine. El objetivo es facilitar la validación de información de forma ágil, segura y estandarizada, aprovechando datos que ya obran en poder del Estado y evitando requerimientos reiterados a los usuarios.

La disponibilidad de esta información permitirá reducir significativamente las asimetrías informativas que actualmente existen en el mercado de crédito, mejorar la calidad del análisis de riesgo y contribuir a una asignación más eficiente de los recursos financieros. Asimismo, facilitará una evaluación más completa de la capacidad de pago de los solicitantes, contribuyendo a prevenir situaciones de sobreendeudamiento y fortaleciendo las prácticas de crédito responsable.

AL/A-MB

La iniciativa se encuentra alineada con las tendencias internacionales en materia de finanzas abiertas y aprovechamiento responsable de datos, siguiendo experiencias implementadas en economías desarrolladas y en diversos países de América Latina, donde la interoperabilidad de la información y el consentimiento del titular han permitido ampliar el acceso al crédito, incrementar la competencia entre proveedores financieros y mejorar la experiencia de los usuarios.

- **Sistema de información integral para la cadena cárnica (artículo 20)**

La cadena cárnica constituye uno de los sectores más relevantes para la economía nacional, tanto por su contribución al producto y al empleo como por su importancia en las exportaciones y en la inserción internacional del país. La capacidad de mantener altos estándares de trazabilidad, control sanitario y certificación constituye una ventaja competitiva fundamental para el posicionamiento de los productos uruguayos en los mercados internacionales.

No obstante, la operativa vinculada a los registros, certificaciones y gestión comercial del sector continúa desarrollándose a través de múltiples sistemas administrados por distintos organismos públicos, entre ellos el Instituto

Nacional de Carnes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Aduanas y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esta situación genera duplicación de controles, reiteración de cargas administrativas, utilización intensiva de documentación en soporte papel, dificultades de coordinación institucional y limitaciones en la calidad, disponibilidad y trazabilidad de la información.

Una parte significativa de los procedimientos administrativos asociados a registros, certificaciones y habilitaciones continúa sustentándose en procesos documentales tradicionales, lo que incrementa los tiempos de gestión, limita las posibilidades de automatización y dificulta la trazabilidad integral de la información.

Con ese objetivo, el proyecto crea el Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación (SRGCC) como una plataforma digital integral destinada a la gestión de registros, habilitaciones, certificaciones y operaciones comerciales del sector cárnico y agroindustrial. El sistema tendrá por finalidad integrar la información relevante en un entorno digital único, promoviendo la automatización de procesos, la estandarización de datos y la interoperabilidad entre los organismos competentes.

La propuesta permitirá digitalizar integralmente las habilitaciones, certificaciones sanitarias y comerciales, implementar mecanismos electrónicos de certificación, fortalecer los procesos de validación y control, y facilitar la comunicación con otras plataformas estratégicas del Estado, particularmente la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Asimismo, prevé la adopción de criterios uniformes para la clasificación y gestión de información, favoreciendo la consistencia y calidad de los registros.

La creación del Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación constituye, por tanto, una medida estratégica para modernizar la gestión pública vinculada a la cadena cárnica, fortalecer la coordinación entre organismos y consolidar las ventajas competitivas de uno de los principales sectores productivos del país.

- **Promoción del notariado electrónico (artículos 21 a 23)**

La transformación digital de la economía exige que los mecanismos de identificación, representación, autenticación y formalización jurídica evolucionen al mismo ritmo que los procesos administrativos y comerciales que buscan modernizarse. En este contexto, la función notarial constituye una herramienta de especial relevancia para dotar de seguridad jurídica a las transacciones y actuaciones realizadas por ciudadanos, empresas y organismos públicos.



2026-5-1-0007992

Sin embargo, una parte importante de los trámites que actualmente involucran intervención notarial continúa sustentándose en procedimientos diseñados para entornos presenciales y en procesos documentales tradicionales. Como consecuencia, miles de actuaciones requieren comparecencias físicas, circulación de documentos en soporte papel y múltiples instancias de validación que generan costos, demoras y cargas administrativas que podrían reducirse significativamente mediante el uso de herramientas digitales.

Los artículos comprendidos en esta sección procuran impulsar la incorporación progresiva del notariado uruguayo al sistema de actuación notarial electrónica, promoviendo el uso de tecnologías digitales en el ejercicio de la función notarial y facilitando su integración con los procesos de transformación digital del Estado y de la actividad económica.

La propuesta parte del reconocimiento de que la digitalización del notariado no constituye únicamente una modernización de la práctica profesional, sino una herramienta concreta para reducir costos regulatorios, agilizar procedimientos, facilitar la inversión y mejorar el clima de negocios. La posibilidad de generar, transmitir, conservar y utilizar documentación notarial electrónica permite eliminar desplazamientos innecesarios, reducir tiempos de formalización y simplificar trámites.

AL/A-MB

Asimismo, se habilita la utilización de soportes digitales para la teneduría de libros societarios y la suscripción electrónica de las correspondientes actas, contribuyendo a modernizar la gestión empresarial y reducir costos administrativos asociados a obligaciones formales que actualmente continúan desarrollándose mediante procedimientos tradicionales.

- **Coordinación con el RUNAEV (artículos 24 y 25)**

La producción, comercialización e importación de alimentos se encuentra sujeta a múltiples controles y procedimientos administrativos destinados a proteger la salud pública, garantizar la inocuidad de los productos y asegurar el cumplimiento de los estándares regulatorios vigentes. Estos objetivos constituyen funciones esenciales del Estado y requieren mecanismos de supervisión eficaces y confiables.

Sin embargo, la evolución del marco institucional ha dado lugar a la coexistencia de competencias y procedimientos que, en determinados casos, generan superposición de controles, duplicación de registros y reiteración de requisitos administrativos respecto de información que ya ha sido verificada por otro organismo público competente.

La reciente creación del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV) constituye una oportunidad para avanzar hacia un modelo más eficiente de gestión regulatoria basado en la interoperabilidad, el

reconocimiento mutuo de actuaciones administrativas y el aprovechamiento de la información ya disponible en poder del Estado.

Los artículos comprendidos en esta sección procuran profundizar ese proceso mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional entre los organismos con competencias en materia de vigilancia sanitaria, control bromatológico, habilitación de establecimientos y registro de productos alimenticios.

La propuesta resulta especialmente relevante para establecimientos y productos sometidos a regímenes sectoriales específicos, permitiendo que habilitaciones otorgadas por organismos especializados puedan ser aprovechadas por otras autoridades competentes en el marco de sus respectivos procedimientos, sin perjuicio de las potestades de control y fiscalización que cada organismo conserva conforme a la normativa vigente.

- **Facilitación de la interoperabilidad de VUCE y VUI con DGI y BPS (artículo 26)**

Este artículo mejora la interoperabilidad de la VUCE y la VUI ya habilitada por la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025, incorporando al BPS y levantando restricciones de tipo legal de las administraciones para interoperar. Esto resulta fundamental para el desarrollo efectivo de una Ventanilla única de Inversiones que centralice distintos trámites.

- **Facilitación de acceso a créditos fiscales por inversiones-gastos promovidos para productores en régimen IMEBA (artículo 27)**

El artículo comprendido en esta sección procura avanzar en la simplificación y automatización del acceso a créditos fiscales para productores agropecuarios tributantes de IMEBA mediante el aprovechamiento de la información contenida en los sistemas de facturación electrónica. Bajo este esquema, las adquisiciones comprendidas en los regímenes promocionales podrán generar automáticamente los créditos fiscales correspondientes, reduciendo o eliminando la necesidad de realizar trámites adicionales para su reconocimiento.

- **Simplificación en trámites consulares (artículo 28)**

La falta de interoperabilidad efectiva entre los sistemas del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades estatales dificulta particularmente la emisión de documentos de viaje, la gestión de visados, las legalizaciones, apostillas y demás actuaciones consulares. Como consecuencia, parte importante de los procedimientos continúa desarrollándose mediante mecanismos manuales que generan mayores costos administrativos y limitan la capacidad de prestar servicios acordes con los principios de celeridad,



2026-5-1-0007992

eficacia, eficiencia y economía que deben regir la actuación de la Administración Pública.

La iniciativa busca fortalecer el denominado Consulado Digital, facilitando la automatización de procesos, la validación electrónica de información, la reducción de actuaciones presenciales innecesarias y la realización remota de un número creciente de trámites y servicios. Asimismo, procura mejorar la coordinación entre organismos públicos mediante el uso de mecanismos de interoperabilidad que permitan reutilizar información ya disponible en registros estatales.

### **2.3) Mecanismos sectoriales de agilización de trámites** **- Productos sometidos a vigilancia sanitaria (artículos 29 a 31)**

Los procedimientos de registro de productos sometidos a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental cumplen una función relevante para garantizar la protección de la salud pública, la seguridad de los consumidores, la sanidad animal y vegetal y la preservación del ambiente. Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación de estos regímenes demuestra que una parte significativa de la carga administrativa que enfrentan las empresas se encuentra asociada a obligaciones formales cuya reiteración no necesariamente aporta beneficios proporcionales desde el punto de vista regulatorio.

AL/A-MB

Los artículos comprendidos en esta subsección procuran modernizar estos procedimientos mediante medidas de simplificación administrativa compatibles con el mantenimiento de adecuados niveles de control regulatorio.

En primer lugar, se establece como criterio general una vigencia mínima de diez años para los registros de mercaderías sometidas a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental. Esta solución reconoce que, en numerosos casos, los productos mantienen inalteradas sus características esenciales durante períodos prolongados y que la reiteración frecuente de procedimientos registrales no necesariamente mejora la protección de los bienes jurídicos tutelados. Al mismo tiempo, se preserva la capacidad regulatoria de los organismos competentes al permitir que la reglamentación establezca plazos menores cuando existan razones fundadas de carácter sanitario, técnico o ambiental asociadas al riesgo de determinadas categorías de productos.

En segundo lugar, se simplifican los procedimientos de renovación de registros mediante la utilización de declaraciones juradas cuando no se hayan producido modificaciones en las condiciones técnicas que dieron origen a la aprobación inicial. Bajo este esquema, la autoridad competente podrá concentrar sus recursos en el análisis de situaciones que efectivamente

impliquen cambios relevantes o riesgos regulatorios específicos, evitando la repetición de evaluaciones sobre información ya validada.

Finalmente, se promueve la utilización de herramientas digitales para la validación de documentación emitida por autoridades extranjeras. A tales efectos, se elimina la exigencia de apostillado o legalización de certificados de libre venta u otros documentos equivalentes cuando estos hayan sido emitidos en formato electrónico y su autenticidad pueda verificarse directamente a través de los sistemas oficiales de la autoridad emisora.

- **Simplificación agropecuaria (artículos 32 a 46)**

El **artículo 32** propone exonerar el costo de los servicios de solicitud de croquis y solicitud de índice de productividad en aquellos casos en que la revisión efectuada confirme la existencia de diferencias respecto de la información registrada. De esta forma, se procura incentivar la actualización de la información agronómica disponible, mejorar la calidad de los registros públicos y facilitar el acceso de los productores a información relevante para la gestión de sus explotaciones.

El **artículo 33** propone habilitar que operadores radicados en países que integren mecanismos de cooperación en materia de bioseguridad reconocidos por Uruguay puedan iniciar y tramitar procesos de evaluación técnica ante el Sistema Nacional de Bioseguridad sin necesidad de acreditar presencia local durante esa etapa. La medida no implica reconocimiento automático de autorizaciones extranjeras ni limita las competencias nacionales de evaluación y decisión, manteniéndose íntegramente los procedimientos y estándares técnicos aplicables en Uruguay.

La exigencia de cumplimiento de los requisitos jurídicos, administrativos y registrales nacionales se mantiene como condición previa para cualquier autorización comercial o habilitación de uso en el territorio nacional. De esta forma, se facilita la incorporación de innovación al sector agropecuario, se promueve una mayor articulación regional y se reducen barreras administrativas innecesarias, sin afectar las garantías regulatorias ni los estándares de bioseguridad vigentes.

El desarrollo de la biotecnología moderna ha ampliado significativamente el conjunto de organismos susceptibles de aplicación en actividades agropecuarias, agroindustriales y ambientales. Junto a los vegetales genéticamente modificados, han surgido nuevas tecnologías basadas en microorganismos y animales modificados genéticamente con potencial aplicación en áreas vinculadas a la producción, la sanidad, la sostenibilidad y la innovación productiva.



2026-5-1-0007992

Sin perjuicio de ello, el marco regulatorio vigente del Sistema Nacional de Bioseguridad fue concebido en función de los desarrollos biotecnológicos predominantes al momento de su creación y se encuentra actualmente enfocado en vegetales genéticamente modificados. Esta situación puede generar incertidumbre respecto al tratamiento regulatorio de nuevas tecnologías y limitar la capacidad institucional para analizar futuras solicitudes vinculadas a otros organismos genéticamente modificados que puedan resultar relevantes para el sector agropecuario.

Las propuestas contenidas en los **artículos 34 y 35** procura dotar al país de una habilitación normativa que permita ampliar progresivamente el alcance del Sistema Nacional de Bioseguridad para comprender también microorganismos y animales genéticamente modificados vinculados a usos agropecuarios, manteniendo en todos los casos la necesidad de desarrollar reglamentaciones específicas y respetando las competencias de los organismos públicos involucrados. La medida no implica la aprobación automática de nuevas tecnologías ni modifica los estándares de evaluación actualmente vigentes, sino que crea el marco jurídico necesario para que el Estado pueda analizar y regular adecuadamente eventuales desarrollos futuros.

AL/A-MB

De esta forma, se busca fortalecer la capacidad institucional del país para acompañar la evolución de la biotecnología moderna, otorgar mayor previsibilidad a investigadores, desarrolladores e inversores, y generar condiciones adecuadas para la incorporación responsable de nuevas herramientas de innovación productiva, manteniendo los niveles de seguridad y control requeridos por la normativa nacional en materia de bioseguridad.

El **artículo 36** procura modernizar y agilizar el procedimiento de expedición de certificados emitidos al amparo del artículo 70 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, instrumento requerido para diversas operaciones vinculadas a inmuebles afectados al régimen de colonización. Actualmente, la tramitación presenta demoras derivadas de la existencia de etapas manuales, validaciones presenciales y procedimientos que no se encuentran plenamente integrados a herramientas digitales. La propuesta establece la digitalización integral del procedimiento, comprendiendo la presentación de solicitudes, el pago de tasas, la gestión interna del expediente y la emisión electrónica de los certificados correspondientes. De esta forma, se busca reducir significativamente los plazos de respuesta, mejorar la trazabilidad del trámite y brindar un servicio más ágil y accesible a los usuarios.

La producción familiar agropecuaria constituye un componente fundamental del desarrollo rural, tanto por su contribución a la producción de alimentos y al empleo como por su papel en el arraigo territorial, la cohesión social y la sostenibilidad de las comunidades rurales. En numerosos establecimientos familiares, la viabilidad económica depende de la capacidad de complementar



la producción primaria con actividades de agregado de valor, elaboración artesanal de productos, turismo rural, apicultura y otras iniciativas que permiten diversificar ingresos y fortalecer la resiliencia económica de las familias rurales.

Sin embargo, muchas de estas actividades complementarias deben cumplir actualmente requisitos de habilitación, registro, tributación y seguridad social diseñados para emprendimientos de escala comercial o industrial significativamente mayor. Esta situación genera costos y cargas administrativas que resultan desproporcionados para pequeños emprendimientos familiares, dificultando su formalización y limitando oportunidades de desarrollo económico en el medio rural.

La propuesta de los **artículos 37 y 38** procura avanzar hacia un marco más adecuado para las características de la producción familiar, mediante la creación de un sistema simplificado de habilitación para actividades artesanales y complementarias desarrolladas en predio, basado en criterios de proporcionalidad, gestión de riesgos y simplificación administrativa. El objetivo es facilitar la formalización de actividades de pequeña escala sin renunciar a los estándares sanitarios, de calidad y trazabilidad que correspondan en cada caso.

La iniciativa se encuentra alineada con los objetivos del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024-2028 y con las políticas de género impulsadas en el sector agropecuario, promoviendo condiciones más favorables para la participación económica de mujeres y jóvenes rurales. De esta forma, se busca fortalecer la formalización, mejorar las oportunidades de generación de ingresos, impulsar el agregado de valor en origen y contribuir al desarrollo sostenible de las economías rurales locales.

El **artículo 39** propone la creación de un sistema de trazabilidad de frutas y verduras. La cadena de producción y comercialización de frutas y hortalizas frescas presenta particularidades que hacen especialmente relevante la disponibilidad de información confiable sobre el origen, recorrido y condiciones de producción de los alimentos. Sin embargo, actualmente la información sectorial se encuentra dispersa entre distintos registros e instrumentos de gestión, dificultando el seguimiento de los productos, la generación de estadísticas y la adopción de medidas oportunas ante problemas sanitarios, incumplimientos normativos o distorsiones en los mercados.

La propuesta procura dotar de respaldo normativo a un sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas en el ámbito del Registro Nacional Frutihortícola, fortaleciendo las capacidades de información, control y fiscalización de la Dirección General de la Granja. La iniciativa permitirá avanzar gradualmente en la integración de instrumentos como el registro de productores, los



2026-5-1-0007992

cuadernos de campo, los registros de aplicaciones fitosanitarias y las guías de tránsito, generando una visión más completa del recorrido de los productos desde la producción hasta su comercialización.

La implementación de este sistema contribuirá a mejorar la gestión de riesgos sanitarios y de inocuidad, facilitar la identificación del origen de los productos, fortalecer la transparencia comercial y generar información estratégica para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones de los distintos actores de la cadena. Asimismo, permitirá respaldar a los productores formales, mejorar las condiciones de comercialización de la producción nacional y fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar prácticas comerciales desleales y el ingreso irregular de mercadería.

La medida también contribuirá a la valorización de la producción nacional, al fortalecimiento de la confianza de consumidores y mercados, y a la consolidación de la reputación del país como proveedor confiable de alimentos. Su implementación gradual permitirá adaptar los instrumentos de trazabilidad a las características del sector, promoviendo una mayor formalización, transparencia y competitividad de la cadena frutihortícola.

Los **artículos 40 a 43** presentan instrumentos digitales en la cadena forestal. La propuesta procura modernizar y digitalizar integralmente los principales trámites vinculados a la cadena forestal, mediante la interoperabilidad entre organismos públicos, la sustitución de procedimientos presenciales y documentales por sistemas electrónicos y el fortalecimiento de la trazabilidad de los productos forestales. A tales efectos, se prevé la creación de mecanismos de intercambio automático de información para la gestión de exoneraciones tributarias, la implementación de un sistema digital único para la emisión y control de guías de tránsito de leña de bosque nativo, la digitalización de las declaraciones juradas de barracas de leña y la gestión íntegramente electrónica de certificados y constancias del Registro de Bosques. Estas medidas buscan reducir cargas administrativas, mejorar la coordinación institucional, facilitar el cumplimiento por parte de los operadores, aumentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad, manteniendo las garantías necesarias para la protección y gestión sostenible de los recursos forestales.

La propuesta del **artículo 44** sustituye la obligación de publicación en medios gráficos privados por la incorporación de las resoluciones al sitio institucional del Instituto Nacional de Carnes, manteniendo la publicación en el Diario Oficial.

El régimen vigente de publicidad de las resoluciones de carácter general del Instituto Nacional de Carnes fue concebido en un contexto en el que los medios gráficos constituían el principal mecanismo de difusión de información pública. En la actualidad, la generalización del acceso a medios digitales y la

AL/A-MB



consolidación de los sitios institucionales como canales oficiales de comunicación permiten alcanzar los mismos objetivos de publicidad y transparencia mediante instrumentos más eficientes y accesibles.

La exigencia de publicar las resoluciones tanto en el Diario Oficial como en dos diarios de circulación nacional genera costos recurrentes para el Instituto sin que ello represente necesariamente una mejora proporcional en el acceso a la información por parte de los administrados. Asimismo, este régimen resulta más gravoso que el previsto con carácter general para numerosos actos administrativos de alcance similar.

La Ley N° 19.292, de 16 de diciembre de 2014, constituyó un instrumento relevante para promover la participación de la producción familiar agropecuaria y de la pesca artesanal en las compras públicas, facilitando el acceso de pequeños productores a mercados institucionales y contribuyendo a una distribución más equilibrada de las oportunidades económicas en el territorio. No obstante, la experiencia de implementación ha puesto de manifiesto algunas limitaciones operativas que dificultan el pleno aprovechamiento de este régimen.

En particular, la naturaleza territorial de las organizaciones de productores hace que, en muchos casos, ninguna de ellas disponga individualmente de la totalidad de la oferta requerida por los organismos públicos compradores. Esta situación puede restringir la capacidad de respuesta frente a demandas de mayor escala o con requerimientos de abastecimiento más amplios, limitando la participación efectiva de productores familiares en determinados procedimientos de contratación.

La propuesta contenida en el **artículo 45** procura facilitar la conformación de esquemas asociativos entre Organizaciones Habilitadas, permitiendo que varias entidades puedan comercializar conjuntamente y ampliar su capacidad de oferta para atender la demanda pública. De esta forma, se fortalecen las posibilidades de acceso a los mercados institucionales, se promueve una mayor integración entre organizaciones de productores y se contribuye a mejorar la distribución territorial de los beneficios derivados de las compras públicas.

- **Simplificación en industria y minería (artículos 46 a 54)**

El régimen de aportación de la industria de la construcción se encuentra regulado por normas dictadas hace más de cincuenta años, en un contexto productivo, tecnológico y comercial sustancialmente diferente al actual. Desde entonces, la evolución de los materiales, los sistemas constructivos y las modalidades de contratación ha generado la aparición de nuevas actividades y servicios especializados que, si bien participan de forma accesorio o complementaria en obras de construcción, son desarrollados habitualmente



2026-5-1-0007992

por empresas cuyo funcionamiento, organización y aportación corresponden claramente al régimen general de Industria y Comercio.

La normativa vigente prevé mecanismos de excepción para estos casos, pero su aplicación requiere la realización de trámites específicos para cada obra, incluyendo la presentación de información sobre personal afectado, características de los trabajos y validaciones administrativas posteriores. Este esquema genera cargas administrativas significativas para empresas, titulares de obra y organismos públicos, además de incertidumbre respecto al régimen de aportación aplicable en cada situación concreta. En algunos casos, incluso pueden producirse situaciones de doble aportación o reclamos posteriores derivados de interpretaciones divergentes sobre la naturaleza de la actividad desarrollada.

La propuesta del **artículo 46** procura adecuar la normativa a la realidad actual de la industria proveedora de la construcción mediante la definición expresa de determinadas actividades que, por su carácter accesorio, especializado o independiente de la ejecución principal de la obra, quedarán excluidas del régimen de aportación de la construcción. De esta forma, se sustituye un sistema basado en excepciones tramitadas caso a caso por reglas más claras y previsibles que permitan determinar de manera directa el régimen de aportación aplicable.

AL/A-MB

La medida contribuirá a reducir trámites, fortalecer la seguridad jurídica de empresas y clientes, disminuir costos de cumplimiento y evitar controversias administrativas innecesarias. Asimismo, permitirá que los organismos públicos concentren sus recursos en tareas de control sustantivo, eliminando procedimientos reiterativos que actualmente generan escaso valor agregado para la Administración y para los operadores económicos.

Los **artículos 47 y 48** flexibilizan condiciones normativas en el segmento de las bebidas. El régimen de autorización y registro de empresas fabricantes de bebidas sin alcohol fue creado en un contexto en el que existían preocupaciones vinculadas a la informalidad, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la existencia de productos que no contaban con las habilitaciones correspondientes para su comercialización. Con ese objetivo, la Ley N° 17.729, de 26 de diciembre de 2003, estableció un sistema de autorización previa a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, basado en la verificación de diversos certificados emitidos por otros organismos públicos.

La experiencia acumulada durante más de veinte años de aplicación del régimen permite constatar que el registro no cumple actualmente una función sustantiva de control ni genera información adicional relevante para la Administración. En la práctica, el procedimiento se limita a verificar la vigencia de habilitaciones, registros y certificados ya emitidos por organismos

competentes en materia tributaria, sanitaria, bromatológica y de propiedad industrial, sin agregar instancias de evaluación propias ni controles adicionales que justifiquen la existencia de un trámite independiente.

Asimismo, la coexistencia de certificados con diferentes plazos de vigencia y mecanismos de renovación genera dificultades operativas para las empresas y para la propia Administración, provocando demoras y complejidades que no aportan beneficios proporcionales desde el punto de vista regulatorio. Esta situación implica costos administrativos para las empresas del sector y destina recursos públicos a tareas de control meramente formales que ya son realizadas por otros organismos competentes.

La propuesta procura eliminar este régimen de registro y autorización, suprimiendo un trámite que ha perdido utilidad práctica y cuya finalidad original se encuentra actualmente cubierta por otros mecanismos de control existentes. La medida permitirá simplificar el marco regulatorio aplicable a la industria de bebidas sin alcohol, reducir cargas administrativas y eliminar duplicaciones innecesarias, manteniendo incólumes las competencias de fiscalización, habilitación y control que continúan ejerciendo los organismos especializados en cada materia.

**Los artículos 49 a 54** modifican las regulaciones de la minería.

La actividad minera constituye una actividad de largo plazo, intensiva en capital y sujeta a múltiples etapas de evaluación, autorización y control por parte de la Administración. La experiencia acumulada en la aplicación del Código de Minería ha permitido identificar diversos procedimientos cuya regulación vigente genera cargas administrativas, demoras e incertidumbres que no contribuyen de manera significativa a los objetivos sustantivos de control, fiscalización y protección del interés público.

Las modificaciones propuestas procuran modernizar diversos procedimientos vinculados al otorgamiento, administración y explotación de títulos mineros, incorporando criterios de simplificación administrativa, mayor certeza jurídica y mejor utilización de los recursos públicos. En particular, se busca facilitar la regularización de los contratos de arrendamiento de derechos mineros mediante un procedimiento más ágil y proporcionado, reducir demoras asociadas a la constitución de servidumbres mineras, racionalizar intervenciones administrativas que actualmente afectan etapas exploratorias de bajo impacto y adecuar determinadas obligaciones de información a la realidad de los distintos tipos de actividad minera.

Asimismo, se introducen ajustes orientados a otorgar mayor claridad normativa en materias que han dado lugar a interpretaciones divergentes durante la aplicación del Código, especialmente en relación con los regímenes de inactividad de explotaciones mineras y con la situación jurídica de los



2026-5-1-0007992

permisos de exploración durante la tramitación de concesiones para explotar. Estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad administrativa, fortalecer la previsibilidad regulatoria y proporcionar reglas más claras tanto para los administrados como para la Administración.

Las medidas propuestas también permiten concentrar la actuación de los organismos públicos en aquellos aspectos que efectivamente requieren evaluación técnica o control sustantivo, eliminando procedimientos que generan demoras sin aportar beneficios proporcionales en términos de seguridad, fiscalización o protección de los recursos minerales.

- **Agilización en productos asociados con la salud (55 a 69)**

La regulación de los productos relacionados con la salud debe asegurar elevados estándares de protección sanitaria, calidad y seguridad para la población. Sin embargo, la consecución de estos objetivos no requiere necesariamente la acumulación de procedimientos administrativos extensos, secuenciales o redundantes. La experiencia acumulada en la aplicación de los regímenes de habilitación de empresas y registro de productos ha puesto de manifiesto la existencia de cargas administrativas que generan demoras significativas para el ingreso de nuevos productos al mercado, incrementan los costos de cumplimiento para las empresas y consumen recursos administrativos que podrían destinarse a actividades de control de mayor impacto sanitario.

AL/A-MB

Actualmente, el proceso de habilitación de empresas elaboradoras, importadoras o representantes de productos de salud suele estructurarse bajo una lógica secuencial que impide iniciar el registro de productos hasta culminar la habilitación del establecimiento. A ello se suman procedimientos de inspección previa, exigencias documentales extensas y procesos de renovación que, en muchos casos, reproducen requisitos ya evaluados anteriormente. Como resultado, la puesta en el mercado de nuevos productos puede sufrir demoras que afectan la competitividad de las empresas, dificultan la innovación y generan costos significativos sin que ello implique necesariamente una mejora proporcional de la protección sanitaria.

La propuesta procura modernizar el sistema de habilitaciones y registros mediante un enfoque basado en riesgo, responsabilidad técnica e intensificación de los controles posteriores a la comercialización. En este sentido, se promueve la implementación de mecanismos de habilitación expeditiva de empresas, la simplificación de requisitos documentales, la agilización de registros de productos y la adopción de procedimientos simplificados para modificaciones y renovaciones que no impliquen cambios sustanciales en los productos registrados.

Asimismo, se propone adecuar el tratamiento regulatorio de los cosméticos a los estándares regionales e internacionales, diferenciándolos del régimen aplicable a los medicamentos y fortaleciendo el principio de responsabilidad de las empresas elaboradoras e importadoras respecto de la seguridad y calidad de los productos que comercializan. Del mismo modo, se incorporan medidas orientadas a simplificar procedimientos vinculados a dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias, eliminando exigencias documentales que no aportan valor efectivo al proceso de evaluación.

Estas medidas se encuentran alineadas con las mejores prácticas internacionales de mejora regulatoria y los compromisos asumidos por Uruguay en materia de cooperación regulatoria internacional. En particular, resultan consistentes con los enfoques impulsados en acuerdos comerciales modernos que promueven regulaciones transparentes, proporcionales al riesgo, basadas en evidencia y orientadas a minimizar cargas administrativas innecesarias, favoreciendo la convergencia regulatoria y el reconocimiento de mecanismos de control equivalentes entre jurisdicciones.

Las propuestas indicadas en los **artículos 55 a 61** no implica una reducción de los estándares sanitarios ni una disminución de las potestades de fiscalización de la Administración. Por el contrario, procura reasignar recursos desde controles meramente documentales hacia actividades de vigilancia, inspección y control efectivo del mercado, fortaleciendo la protección de la salud pública. Al mismo tiempo, permitirá reducir significativamente los tiempos de habilitación y registro, disminuir costos regulatorios para las empresas, facilitar la incorporación de nuevos productos y tecnologías, promover la formalización de operadores y mejorar la competitividad de los sectores productivos vinculados a la salud.

De esta forma, se avanza hacia un modelo regulatorio más moderno, eficiente y alineado con los estándares internacionales, capaz de compatibilizar la protección sanitaria de la población con la innovación, la competitividad y el desarrollo productivo.

El **artículo 62** propone ampliar el marco de acción de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (AViSU). La creación de la AViSU permite consolidar, modernizar y racionalizar las funciones regulatorias vinculadas al control de productos sometidos a vigilancia sanitaria. La existencia de competencias dispersas, procedimientos heterogéneos y múltiples puntos de interacción con la Administración genera costos administrativos para los operadores, dificulta la coordinación institucional y limita las posibilidades de desarrollar enfoques regulatorios integrados y basados en riesgo.

En este contexto, resulta conveniente que la nueva institucionalidad sanitaria comprenda no solamente las categorías de productos originalmente previstas, sino también otros productos cuya regulación comparte objetivos,



2026-5-1-0007992

metodologías de evaluación y mecanismos de control similares. Entre ellos se encuentran los equipos y dispositivos médicos, los reactivos de diagnóstico, los alimentos para propósitos médicos especiales, los productos domisanitarios y los precursores químicos, todos los cuales requieren vigilancia técnica especializada y mecanismos de fiscalización específicos para garantizar la protección de la salud pública.

La incorporación de estas categorías dentro de las competencias de la Agencia permitirá concentrar capacidades técnicas, promover criterios regulatorios uniformes y fortalecer la coordinación entre las distintas funciones de evaluación, registro, vigilancia e inspección. Asimismo, facilitará la adopción de procedimientos armonizados, reducirá duplicaciones administrativas y mejorará la eficiencia en la utilización de los recursos públicos destinados a las tareas de control sanitario.

La medida se encuentra alineada con las mejores prácticas internacionales observadas en agencias regulatorias modernas, donde la supervisión de productos vinculados a la salud se desarrolla bajo estructuras institucionales integradas que permiten una gestión más eficiente de los riesgos sanitarios y una mayor coherencia regulatoria. Al mismo tiempo, contribuirá a generar mayor previsibilidad para los operadores económicos, simplificar la interacción con la Administración y facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas y productos especializados al mercado nacional.

AL/A-MB

Los **artículos 62 a 68** cambian cometidos, gobernanza y aspectos operativos de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AETSU).

- **Agilización del arbitraje comercial (artículo 70)**

La resolución eficiente de controversias constituye un componente fundamental del clima de negocios y de la competitividad de una economía. En las relaciones comerciales entre empresas, la existencia de mecanismos ágiles, especializados y confiables para la prevención y resolución de conflictos contribuye a reducir costos de transacción, preservar relaciones comerciales y generar mayores niveles de seguridad jurídica para los agentes económicos.

El ordenamiento jurídico uruguayo prevé actualmente la conciliación judicial previa como requisito para el inicio de determinados procesos. Si bien este mecanismo cumple una función relevante en la promoción de acuerdos extrajudiciales, su tramitación implica la utilización de recursos del sistema judicial para controversias que, en muchos casos, podrían ser abordadas eficazmente a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos administrados por instituciones especializadas.

Las controversias comerciales entre empresas presentan características particulares que justifican un tratamiento específico. Habitualmente involucran organizaciones con estructuras profesionales, asesoramiento jurídico permanente y vínculos comerciales cuya continuidad puede resultar de interés para ambas partes. Asimismo, estos conflictos suelen involucrar información económica, financiera, contractual o estratégica cuya divulgación puede afectar la posición competitiva de las empresas o dificultar la preservación de relaciones comerciales en curso.

En este contexto, los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje desarrollados por centros especializados ofrecen ventajas relevantes en términos de especialización, flexibilidad, confidencialidad y eficiencia. La reserva propia de estos mecanismos favorece un intercambio más amplio de información entre las partes y genera condiciones más propicias para la búsqueda de soluciones consensuadas, evitando en muchos casos la judicialización de controversias que podrían resolverse mediante acuerdos tempranos.

La propuesta procura reconocer y fortalecer estos mecanismos institucionales de resolución de controversias comerciales, equiparando determinados procedimientos de conciliación desarrollados ante centros especializados a la conciliación judicial previa exigida por la normativa procesal. De esta forma, se promueve una utilización más eficiente de los recursos del sistema de justicia, se amplían las alternativas disponibles para las empresas y se favorece la resolución temprana de conflictos en ámbitos técnicamente especializados y sujetos a reglas claras de funcionamiento.

La medida se encuentra alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de resolución alternativa de controversias y contribuye a fortalecer el entorno institucional para la actividad empresarial, promoviendo mecanismos más ágiles, especializados y confidenciales para la gestión de conflictos comerciales.

- **Agilización de trámites ambientales (artículo 71)**

El artículo 71 mejora la interacción entre las disposiciones de Ordenamiento Territorial y las Autorizaciones Ambientales Previas, a los efectos de hacer más simple la tramitación de estas últimas, manteniendo las competencias de ambas instituciones.

- **Derogación de prohibición de abrir carnicerías los domingos**

El **artículo 72** propone la derogación de la prohibición de abrir carnicerías los domingos, establecida en la Ley Nº 10.057, de 10 de octubre de 1941. Esta Ley fue aprobada en un contexto histórico en el que las condiciones de conservación, transporte y comercialización de productos cárnicos eran



2026-5-1-0007992

sustancialmente diferentes a las actuales. Las restricciones allí previstas respecto al funcionamiento de carnicerías y a la comercialización de carne fresca durante los días domingos respondían a preocupaciones sanitarias y comerciales propias de una época en la que no existían los actuales sistemas de refrigeración, logística y control de la cadena de frío.

La evolución tecnológica experimentada durante las últimas décadas ha transformado profundamente las condiciones de producción, distribución y comercialización de alimentos. Los avances en materia de conservación, almacenamiento, transporte y control sanitario permiten hoy garantizar adecuadamente la inocuidad de los productos cárnicos con independencia del día en que se realice su comercialización, eliminando las razones que originalmente justificaron la restricción legal.

Asimismo, los hábitos de consumo, las modalidades de comercialización y la organización de la actividad económica han evolucionado significativamente, consolidándose esquemas de funcionamiento comercial más amplios y continuos. En este contexto, la existencia de una prohibición legal específica para determinados establecimientos resulta difícil de compatibilizar con la realidad actual del mercado y con las condiciones en las que operan otros formatos comerciales.

AL/A-MB

## Capítulo 2. Facilitación del comercio exterior

Para una economía pequeña y abierta como la uruguaya, los costos del comercio exterior son un determinante directo de la competitividad de la producción. La evidencia empírica comparada indica que dichos costos se mantienen elevados en Uruguay, afectando la diversificación productiva, la inversión y el costo de vida. Este capítulo profundiza la agenda de desburocratización y desempapelamiento iniciada por el Gobierno —que relevó cerca de quinientos planteos del sector privado—, trasladando al plano legal las reformas que requieren rango legislativo.

La orientación es doble. Por un lado, reducir los costos directos de operar en el comercio exterior, eliminando documentos en papel, intervenciones redundantes y tasas que no está claramente establecido la relación que tienen con el costo de los servicios prestados. Por otro lado, se busca modernizar el modelo de control, concentrando la fiscalización de los organismos competentes en las operaciones aduaneras de mayor riesgo mediante análisis de riesgo y reconocimiento de certificaciones de países con altos estándares regulatorios.

- **Creación del autodespacho aduanero**

Mediante los **artículos 73 a 81** se incorpora al ordenamiento jurídico uruguayo la figura del autodespacho aduanero, permitiendo que las empresas y

personas físicas con actividad empresarial que acrediten capacidad técnica y cumplan determinados requisitos de solvencia y responsabilidad, puedan realizar directamente sus propias operaciones aduaneras de importación y exportación.

El régimen vigente actualmente establece la intervención preceptiva del despachante de aduana para la realización de la generalidad de las operaciones aduaneras de importación y exportación. Si bien dicho operador, clave para brindar seguridad y trazabilidad a las operaciones aduaneras, continuará cumpliendo un rol relevante como auxiliar de la actividad aduanera, la experiencia internacional comparada demuestra que la posibilidad de que ciertos operadores calificados puedan gestionar directamente sus operaciones constituye una herramienta eficaz para reducir costos de transacción, incrementar la eficiencia logística y fortalecer la competitividad empresarial.

La reforma mantiene los estándares de control actualmente existentes, exigiendo capacitación técnica acreditada, garantías suficientes, inscripción previa en registros administrados por la Dirección Nacional de Aduanas y sometimiento a los mismos regímenes de responsabilidad y sanciones aplicables a los despachantes de aduana. De esta forma, se promueve una mayor libertad de organización de la actividad empresarial sin menoscabar las potestades de fiscalización y control del Estado.

- **Revisión de tasas**

El **artículo 82** establece un programa integral de revisión de las tasas y demás cargas exigidas en ocasión de operaciones de comercio exterior, con el objetivo de asegurar que las mismas mantengan una relación razonable con el costo efectivo de los servicios prestados.

La medida recoge principios ampliamente reconocidos en los acuerdos internacionales de facilitación del comercio y procura evitar que tasas y otros gravámenes originalmente concebidos como contraprestación por servicios administrativos se transformen en mecanismos de recaudación desvinculados de los costos que justifican su existencia.

Asimismo, se fortalece la transparencia mediante la obligación de publicar en forma electrónica la información relativa a las tasas aplicables, sus fundamentos, organismos recaudadores y modalidades de pago, contribuyendo a reducir costos de información y a mejorar la previsibilidad regulatoria de los procesos de comercio exterior.



2026-5-1-0007992

- **Prohibición de las detracciones a las exportaciones**

El **artículo 83** plantea la eliminación de la facultad legal del Poder Ejecutivo para establecer detracciones a las exportaciones. Las detracciones constituyen gravámenes que incrementan artificialmente el costo de exportar y reducen la competitividad internacional de la producción nacional. Su eliminación reafirma el principio de que las exportaciones no deben ser objeto de cargas fiscales que desincentiven la inserción internacional del país, favoreciendo la inversión, la producción y la generación de empleo orientados a los mercados externos.

- **Promoción de la gestión en base a análisis de riesgo**

El **artículo 84** establece que la asignación de canales de revisión aduanera deberá realizarse exclusivamente sobre la base de criterios de análisis de riesgo definidos por la Dirección Nacional de Aduanas. Actualmente subsisten determinadas hipótesis de revisión física o documental obligatoria establecidas por normas específicas, sin consideración del riesgo real de la operación aduanera. Esto determina que la Dirección Nacional de Aduanas debe concentrar controles en operaciones consagradas en la legislación vigente y no le permite focalizarse en los productos que su propia evidencia le indica que tiene mayor riesgo. La experiencia demuestra que este tipo de controles generalizados consume recursos públicos y privados sin generar beneficios proporcionales en términos de fiscalización. La reforma procura concentrar los esfuerzos de control en aquellas operaciones que efectivamente presentan mayores riesgos de incumplimiento.

AL/A-MB

Mediante el **artículo 85** se habilita al LATU a implementar mecanismos de gestión diferencial y tramitación preferencial para empresas que acrediten antecedentes favorables de cumplimiento y adecuados sistemas de control y trazabilidad. La medida se inspira en modelos de operadores confiables ampliamente utilizados a nivel internacional y también por la Aduana de Uruguay, y procura concentrar los recursos de fiscalización en aquellas operaciones que presentan mayores riesgos sanitarios o regulatorios, reduciendo tiempos y costos para los operadores que demuestren un comportamiento consistente de cumplimiento.

Por su parte, el **artículo 86** crea un marco legal para el reconocimiento de certificaciones, autorizaciones y evaluaciones de conformidad emitidas por autoridades u organismos de países que cuenten con elevados estándares regulatorios. La creciente integración de las cadenas globales de valor y la existencia de sistemas regulatorios altamente desarrollados en múltiples jurisdicciones hacen posible sustituir controles duplicados por mecanismos de reconocimiento de equivalencias, sin afectar los objetivos legítimos de protección de la salud, la seguridad, el ambiente o los consumidores. La medida permitirá reducir significativamente tiempos y costos asociados a la

importación de bienes, manteniendo simultáneamente elevados estándares de protección mediante controles posteriores basados en análisis de riesgo. Este artículo habilitará a esta herramienta facilitadora que solo será utilizada cuando se garantice que los objetivos sanitarios o técnicos quedarán preservados.

- **Agilización de procedimientos aduaneros**

El **artículo 87** elimina la intervención previa de la Dirección General Impositiva en los casos de retorno de mercaderías exportadas, sustituyendo dicho control previo por mecanismos de regularización a posteriori. La experiencia internacional comparada demuestra que la intervención previa genera demoras operativas sin aportar beneficios equivalentes en materia de control fiscal, por lo que se opta por un modelo más ágil y compatible con las mejores prácticas internacionales de facilitación del comercio.

Mediante el **artículo 88** se amplía y mejora el régimen de autorevisión aduanera, incentivando que los propios operadores comuniquen voluntariamente errores detectados en sus declaraciones. El sistema premia el cumplimiento espontáneo mediante un régimen de sanciones graduado según la rapidez con que se efectúe la corrección, fomentando una relación de cooperación entre la Administración y los operadores económicos y permitiendo una utilización más eficiente de los recursos de fiscalización.

El **artículo 89** moderniza el régimen de prescripción de créditos y obligaciones aduaneras, facultando a la Dirección Nacional de Aduanas a declarar de oficio la prescripción cuando se configuren los requisitos legales. La medida procura fortalecer los principios de seguridad jurídica, certeza y buena administración, evitando la subsistencia indefinida de obligaciones que jurídicamente ya se encuentran extinguidas.

El **artículo 90** regula expresamente la mora por pago tardío de tributos aduaneros en aquellos casos en que no exista una infracción aduanera específica aplicable. La medida busca introducir un régimen claro, proporcional y previsible para situaciones de incumplimiento meramente temporal, diferenciándolas de conductas infraccionales de mayor gravedad.

El **artículo 91** habilita la implementación de mecanismos de pago diferido de tributos aduaneros para operaciones de importación, sujeto a garantías y condiciones que establezca la reglamentación. Esta herramienta constituye una práctica utilizada en múltiples administraciones aduaneras modernas y tiene por finalidad mejorar el flujo financiero de las empresas, reducir costos operativos y facilitar las actividades productivas y comerciales, sin afectar las garantías de cobro del Estado. Se espera que las MIPYMES, que tienen mayores costos relativos de fondeo, sean las principales beneficiarias de no



2026-5-1-0007992

tener que disponer de todo el monto de las obligaciones tributarias incluso antes de hacerse de la mercadería, como ocurre en la actualidad.

- **Desempapelamiento del comercio exterior**

Los **artículos 92 y 93** consolidan el proceso de transformación digital de la gestión aduanera mediante la aceptación exclusiva de documentación electrónica y la eliminación progresiva de la obligación de conservar documentos en soporte papel. El desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la generalización de los documentos electrónicos y la experiencia adquirida durante los procesos de digitalización permiten sustituir definitivamente procedimientos basados en documentación física. La medida reducirá costos administrativos, eliminará cargas logísticas innecesarias, facilitará la fiscalización electrónica y contribuirá a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción del uso de papel.

- **Eliminación de la prohibición de importar vehículos utilitarios usados**

El **artículo 94** habilita la importación de determinadas categorías de vehículos pesados usados destinados al transporte de mercancías, manteniendo la prohibición respecto de camionetas, pickups y utilitarios livianos. La medida busca ampliar y abaratar las opciones disponibles para empresas de transporte y logística, promoviendo una reducción de costos de inversión y renovación de flota, sin comprometer los estándares de seguridad vial y protección ambiental, cuyo cumplimiento continuará siendo exigido por los organismos competentes.

- **Ampliación del régimen de prototipado**

El **artículo 95** amplía los beneficios previstos para actividades de innovación tecnológica vinculadas a la electrónica y la robótica, incorporando nuevos bienes y herramientas necesarias para procesos de desarrollo tecnológico y pequeñas series de producción. La medida procura fortalecer el ecosistema nacional de innovación, facilitando el acceso a insumos especializados y reduciendo los costos asociados a las etapas iniciales de investigación, desarrollo y validación de nuevos productos.

- **Medidas para prevenir la importación de productos elaborados bajo trabajo forzoso**

El **artículo 96** incorpora al ordenamiento jurídico nacional un marco general para prevenir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso. La medida reafirma el compromiso histórico de Uruguay con los principios fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y procura asegurar

AL/A-MB

que el comercio internacional se desarrolle en condiciones de competencia leal y respeto a los derechos humanos fundamentales. El artículo busca prevenir el llamado “dumping social”. Asimismo, la disposición alinea progresivamente la normativa nacional con las tendencias regulatorias internacionales observadas en diversas economías avanzadas, fortaleciendo la credibilidad y reputación internacional del país en materia de sostenibilidad y comercio exterior justo con condiciones de competencia leal.

### **Capítulo 3 – Promoción de la competencia**

Uruguay es un país que enfrenta desafíos para sostener la competencia: mercados pequeños, frecuentemente concentrados, en los que resulta esencial una política activa que prevenga los abusos de posición dominante y las prácticas colusorias.

La creación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) en 2007 y los avances normativos posteriores —como la incorporación del control previo de concentraciones— marcaron un proceso de desarrollo institucional relevante. Sin embargo, el diseño vigente presenta limitaciones reconocidas tanto por la experiencia nacional como por las recomendaciones de organismos internacionales.

La Coprodec funciona como órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, sin personería jurídica propia, con dotaciones de personal y financiamiento limitados y sin una separación orgánica entre quienes investigan las conductas y quienes las juzgan. Sus poderes para requerir información, realizar inspecciones y adoptar medidas cautelares resultan acotados en comparación con los estándares internacionales, y carece de instrumentos modernos de detección y persecución de carteles, como los programas de clemencia. En mercados pequeños y concentrados, una autoridad de competencia débil implica, en los hechos, una menor disciplina competitiva sobre las empresas con poder de mercado, cuyos efectos pagan los consumidores en forma de precios más altos.

- **Reforma de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia**

La primera sección del Capítulo introduce cambios profundos en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y en su Ley fundacional, la N° 18.159, de 20 de julio de 2007.

Los **artículos 97 y 98** crean a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (COPRODEC) como un servicio descentralizado, garantizando su independencia.



2026-5-1-0007992

Los **artículos 99 a 105** regulan diversos aspectos de la nueva institucionalidad atendiendo esta nueva condición de servicio descentralizado. La comisión funcionará con un Directorio colegio de tres miembros designados por el Presidente actuando en Consejo de Ministros con venia del senado. Sus integrantes serán elegidos entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral, según una nómina organizada por el Comité de Selección.

El **artículo 106** fortalece la función de promoción de la competencia, facultando a la Comisión para emitir guías y recomendaciones, realizar estudios de mercado y evaluaciones de impacto competitivo, promover la transparencia y la cooperación institucional, y formular recomendaciones no vinculantes sobre regulaciones que afecten la competencia.

El **artículo 107** establece disposiciones transitorias para la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia como servicio descentralizado, regulando la continuidad de las competencias actualmente ejercidas, la transferencia automática de expedientes, recursos, bienes, sistemas y personal, la validez de las actuaciones en trámite, la sucesión institucional del organismo, la integración inicial de sus autoridades, la aprobación de su estructura organizativa y estatuto funcional, la implementación gradual de la Dirección de Investigación, el régimen aplicable a los procedimientos en curso, las condiciones para la entrada en vigor de las nuevas tasas y mecanismos de financiamiento, así como las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada, sin afectar la continuidad del servicio ni los derechos de los administrados.

AL/A-MB

Los **artículos 108 a 110** crean una Dirección de Investigación como órgano técnico especializado dentro de la Comisión, con independencia funcional para instruir los procedimientos, investigar conductas anticompetitivas, analizar concentraciones económicas y formular recomendaciones técnicas. Asimismo, regulan la designación, requisitos, funciones y garantías de independencia de su Director, delimitan las competencias de la Dirección y establecen una clara separación entre las funciones de investigación y las de decisión, impidiendo que el Directorio interfiera en el contenido de las investigaciones o en las recomendaciones formuladas para casos concretos. Esta reforma fortalece la imparcialidad y el debido proceso, evita que quienes investigan sean quienes deciden, reduce el riesgo de interferencias indebidas y alinea el diseño institucional de la autoridad de competencia con las mejores prácticas internacionales. separan las funciones de investigación y competencia.

- **Modificaciones en el régimen de concentraciones de la Coprodec**

El **artículo 111** propone la creación de una tasa por la presentación de solicitudes de autorización de concentraciones económicas, cuyo monto se



determina en función de la facturación de las empresas participantes y cuyos recursos se destinan exclusivamente a financiar las actividades de la Comisión vinculadas al análisis de concentraciones y al fortalecimiento de sus capacidades técnicas e institucionales. La incorporación de esta tasa procura dotar a la autoridad de competencia de una fuente de financiamiento estable para atender procedimientos particularmente complejos y costosos, reduciendo las restricciones derivadas de las limitaciones presupuestales que históricamente han afectado su funcionamiento. Asimismo, se trata de una solución ampliamente utilizada a nivel internacional, basada en el principio de que quienes generan la necesidad de revisión administrativa contribuyan a financiar el costo de ese servicio, preservando al mismo tiempo la independencia del órgano mediante reglas de transparencia y la prohibición de vincular la recaudación con el resultado de los procedimientos.

Los **artículos 112 a 115** producen cambios en el régimen de concentraciones. El **artículo 112** reduce el umbral agregado de facturación de 500 millones a 350 millones de UI y, simultáneamente, se incrementa el umbral individual exigido para al menos dos de las empresas participantes de 30 millones a 50 millones de UI. Esta modificación busca mejorar la focalización del régimen de control de concentraciones: por un lado, permite revisar operaciones de menor tamaño que pueden tener efectos relevantes sobre la competencia y, por otro, evita exigir autorización previa para operaciones en las que alguno de los participantes tiene una presencia económica meramente marginal en Uruguay. De este modo, el sistema concentra los recursos de la autoridad en aquellas operaciones con mayor potencial de afectar la competencia en los mercados nacionales. El **artículo 113** agrega más precisión acerca de cuándo se configuran cambios en el control. El **artículo 114** reforma el procedimiento de autorización de concentraciones, estableciendo un régimen más completo, previsible y alineado con las mejores prácticas internacionales. La propuesta incorpora una etapa formal de admisibilidad de la solicitud, estructura el análisis en una fase inicial y una fase de evaluación extendida para las operaciones más complejas, regula expresamente los requerimientos de información y la suspensión de plazos, desarrolla un régimen de compromisos o remedios negociados con las partes y clarifica el funcionamiento de la autorización tácita. El **artículo 115** agrega un régimen de infracciones al régimen de concentraciones económicas y el **artículo 116** ajusta la redacción de las competencias de los sectores regulados.

- **Ajustes en las definiciones de prácticas anticompetitivas**

Los **artículos 117 y 118** realizan precisiones en la definición de las conductas anticompetitivas. En particular, mediante el 118 se reformulan las prácticas prohibidas, distinguiendo expresamente entre prácticas unilaterales (abuso de posición dominante), acuerdos horizontales y acuerdos verticales, y se incorpora por primera vez un régimen de ilícitos por objeto, estableciendo que determinadas conductas especialmente graves entre competidores pueden



2026-5-1-0007992

sancionarse sin necesidad de demostrar sus efectos concretos sobre el mercado.

- **Fortalecimiento de las capacidades investigativas**

Los **artículos 119 a 129** refuerzan las capacidades investigativas de la Coprodec. Se agrega el principio de oportunidad y priorización a los efectos de ganar eficiencia (artículo 120), se redefinen las medidas preparatorias, las denuncias, se reglamenta el derecho al acceso al expediente y se fortalece y aclara el alcance del cese preventivo y las medidas preventivas (**artículo 123**). El **artículo 124** fortalece las potestades requisitorias e investigativas, el **artículo 125** introduce y regula la citación a declarar y los **126 a 129** regulan la información confidencial y los secretos comerciales que se pueden solicitar en el marco de una investigación, el deber de reserva, las medidas cautelares e inspecciones con autorización judicial.

- **Resolución anticipada y programa de clemencia**

Mediante los **artículos 130 a 132** se incorporan dos herramientas para fortalecer la aplicación de la Ley de Competencia: un régimen de terminación anticipada de los procedimientos y un programa de clemencia para la detección de carteles. En materia de terminación anticipada, se regula de forma detallada la posibilidad de que los investigados asuman compromisos para poner fin al procedimiento, estableciendo los criterios para su aceptación, los tipos de medidas que pueden ofrecerse, la posibilidad de obtener reducciones de multas cuando exista una colaboración efectiva y un importante ahorro de recursos administrativos, así como mecanismos de supervisión y sanciones por incumplimiento. Paralelamente, se crea por primera vez un programa integral de clemencia, que prevé la exoneración total de la multa para el primer participante de un cartel que aporte información decisiva para descubrir o acreditar la infracción y reducciones graduales para los colaboradores posteriores, regulando expresamente los requisitos de cooperación, confidencialidad y pérdida de beneficios.

- **Fortalecimiento del régimen sancionatorio**

Los **artículos 133 y 134** fortalecen el régimen sancionatorio de la ley, incrementando las multas máximas e incorporando criterios objetivos para su graduación, alineados con las mejores prácticas internacionales. La reforma amplía el catálogo de medidas correctivas que puede imponer la autoridad, permitiendo ordenar remedios estructurales y conductuales para restablecer las condiciones de competencia, y establece expresamente que las sanciones deben ser proporcionales, disuasorias y fundadas. Asimismo, se crea un régimen específico para sancionar la obstrucción de las investigaciones, tipificando conductas como la negativa injustificada a colaborar, la entrega de información falsa, la destrucción de pruebas o el incumplimiento de medidas

AL/A-MB

ordenadas por la Comisión, habilitando además la imposición de multas coercitivas diarias para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Los **artículos 135 a 139** introducen otros ajustes al régimen sancionatorio, introduciendo el cierre por inactividad y ajustando las condiciones del plazo de prescripción.

- **Transparencia en las relaciones entre proveedores y distribuidores**

A los efectos de prevenir prácticas abusivas, el **artículo 140** faculta a la Comisión para elaborar y publicar guías, recomendaciones y códigos de buenas prácticas sobre las relaciones comerciales entre proveedores, distribuidores y grandes superficies, con el objetivo de promover mayor transparencia, previsibilidad y competencia efectiva. Estas directrices servirán como criterios técnicos orientadores para prevenir prácticas comerciales que puedan generar efectos exclusorios o restricciones injustificadas a la competencia.

- **Habilitación de importadores subsiguientes de un mismo producto**

En determinados mercados con alta presencia de una marca dominante implementar medidas que estimulen la competencia dentro de la misma marca también puede tener efectos sobre el nivel de precios. Bajo la normativa vigente, quien desea importar un producto que ya se encuentra registrado y comercializándose en el país debe, en general, tramitar un registro completo: presentar nuevamente el dossier técnico, obtener un Certificado de Libre Venta del país de origen y, en muchos casos, contar con la autorización del fabricante o del primer registrante.

Estas exigencias otorgan al primer importador una exclusividad de hecho. El fabricante extranjero o su representante local pueden bloquear la entrada de importadores subsiguientes —incluso cuando se trata de exactamente el mismo producto, elaborado en la misma planta— simplemente negando la documentación requerida. El resultado es la segmentación del mercado uruguayo respecto de los mercados de la región: un mismo bien puede ofrecerse en el país a precios sustancialmente superiores a los de países vecinos sin que ningún competidor pueda arbitrar esa diferencia mediante la importación paralela.

Mediante el artículo 141, el proyecto introduce una innovación en el sistema regulatorio, habilitando la existencia de registrantes subsiguientes que presentan información simplificada. Como contrapartida, deben garantizar la trazabilidad del lote y la autenticidad del producto.



2026-5-1-0007992

- **Fomento de la competencia en las compras públicas**

El artículo establece que los pliegos de contratación pública deberán diseñarse de forma que promuevan la concurrencia y maximicen la participación de oferentes, reduciendo barreras de acceso y favoreciendo procesos competitivos. Para ello, encomienda al Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, la elaboración de lineamientos para la preparación de los pliegos, teniendo en cuenta las características de los mercados con mayor riesgo de colusión, la utilización de mecanismos de agregación de demanda y la adopción de medidas que faciliten la participación de empresas de menor tamaño. La importancia de esta disposición radica en que incorpora un enfoque preventivo de la política de competencia en las compras públicas. En lugar de actuar únicamente cuando ya existe un acuerdo colusorio o una práctica anticompetitiva, busca que las reglas de contratación reduzcan los incentivos a la colusión, aumenten el número de oferentes y mejoren la competencia por los contratos públicos, lo que puede traducirse en menores precios, mayor innovación y un uso más eficiente de los recursos públicos. Este enfoque es consistente con las recomendaciones internacionales y constituye una práctica cada vez más extendida en los sistemas modernos de contratación pública.

AL/A-MB

- **Regulación de tasas de intercambio en transferencias**

El **artículo 143** habilita al ejecutivo a regular las tasas de intercambio, entendida como la remuneración que el adquirente debe abonar a los emisores de los medios de pago electrónicos. Esto responde a una falla de mercado, donde no opera la competencia, en una actividad caracterizada además por ser muy concentrada. La tasa de intercambio constituye un costo que el adquirente traslada a los comercios mediante el arancel por aceptar tarjetas. Cuando es excesivamente elevada, encarece el uso de medios de pago electrónicos y termina repercutiendo en los precios pagados por consumidores y empresas.

- **Libre elección de la lancha de prácticos**

La reducción de los costos de escala en el Puerto de Montevideo es fundamental para promover su uso como centro de distribución y puerto de concentración de cargas regional. También en el transporte de la hidrovía es importante mantener las condiciones competitivas del sistema portuario de Nueva Palmira. La existencia de mercados con operadores obligatorios y exclusivos no debe trasladarse a servicios donde es viable y preferible tener condiciones de competencia a los efectos de que el servicio sea más eficiente.



La elección del servicio de transporte de Prácticos ha mantenido, a lo largo del tiempo, un diferencial en los costos de escala de los buques que arriban a las diferentes Zonas y Puertos de nuestro país, en comparación con la contratación de servicios a la que habitualmente acceden los agentes representantes de armadores o navieras a nivel global. En la actualidad, el Práctico es quien tiene el derecho a elegir la lancha en la que se va a transportar y, por otro lado, no se ha podido garantizar la independencia entre ellos y los proveedores del servicio de lanchaje.

La modificación proyectada en el **artículo 144** permite que quien contrata el servicio tenga la libertad de optar en un marco de competencia entre las lanchas que formen parte de la oferta de servicios. Cabe destacar que la autoridad competente cuenta con la Disposición Marítima 117 de fecha 7/03/2008 en todo lo que refiere a las normas de seguridad, construcción y equipamiento para las embarcaciones de transporte de prácticos.

Por ende, si las condiciones de seguridad están siendo controladas y ejercidas por la autoridad competente, la elección de los servicios de transporte debe ser realizada por quien toma el servicio y lo abona, dentro de aquellas embarcaciones que hayan sido habilitadas para ello.

- **Información para el consumidor**

La competencia efectiva requiere consumidores que puedan comparar precios con facilidad. En los mercados de consumo masivo, la proliferación de presentaciones, envases y formatos dificulta esa comparación: un mismo producto puede ofrecerse en decenas de tamaños distintos, y el precio exhibido por envase no permite identificar de manera inmediata cuál alternativa resulta más conveniente. La evidencia internacional muestra que la exhibición del precio por unidad de medida —por kilogramo, litro, metro o unidad— mejora la capacidad de decisión de los consumidores, intensifica la competencia entre marcas y formatos, y favorece especialmente a los hogares que más cuidadosamente deben administrar su presupuesto.

Uruguay carece de una norma general que imponga esta obligación, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea y en varios países de la región. Mediante los **artículos 145 a 148**, el proyecto incorpora esta herramienta, alcanzando a las grandes superficies, a los comercios de alimentos, higiene personal y artículos de uso doméstico con múltiples cajas o locales, y a los canales de comercio electrónico.

## **Capítulo 4 – Innovación y aceleración de la inversión**

Elevar la tasa de inversión y la contribución de la productividad al crecimiento exige ampliar el acceso al financiamiento productivo, promover la innovación —incluida la financiera— y remover los obstáculos que enfrentan las



2026-5-1-0007992

empresas de menor tamaño para crecer. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan la amplia mayoría del tejido empresarial y del empleo del país; sin embargo, enfrentan costos de cumplimiento proporcionalmente mayores y un esquema tributario cuyas rigideces pueden desalentar su crecimiento y formalización. Este capítulo articula el apoyo a las mipymes con la modernización del sistema financiero y estímulos sectoriales a actividades con potencial de inversión e innovación.

#### 4.1) Simplificación regulatoria a MiPYMES (artículos 149 a 159)

Las MiPYMES representan el 99% del tejido empresarial del Uruguay y generan el 65% del empleo privado, siendo uno de los principales motores del empleo en nuestro país, con predominancia del empleo estable con baja rotación y una participación femenina empresarial superior a la de las grandes empresas. Un 87% de las MiPYMES son microempresas, es decir que ocupan hasta cuatro personas y sus ventas anuales no superan las U.I. 2.000.000. Por otra parte, representan el 83% de las firmas exportadoras pero sólo el 6% del valor exportado.

AL/A-MB

Entre sus principales desafíos se encuentran su baja contribución al PIB, lo cual revela deficiencias en sus niveles de productividad. Por otro lado, la carga regulatoria con sus elevados costos fijos que afecta en mayor proporción a las empresas más pequeñas. Por último, la escasez de instrumentos de financiamiento adecuados que, en combinación con las altas cargas administrativas y burocráticas, dificultan el acceso al sistema financiero, y esto a su vez perpetúa las barreras que enfrentan a la hora de invertir, innovar y ser más productivas.

Por la relevancia que las MiPYMES tienen para el tejido productivo de nuestro país es que los **artículos 149 a 154** proponen un esquema de simplificación tributaria que elimina las rigideces del esquema vigente, acompañando su crecimiento de manera gradual, sustituyendo los saltos discretos en la carga tributaria por continuos. De esta forma, se acompaña el desarrollo de las empresas más pequeñas, estimulando su crecimiento y rentabilidad con cargas tributarias graduales, evitando prácticas nocivas que promuevan la informalidad.

El **artículo 155** propone que las MiPYMES tengan aranceles diferenciales en los registros técnicos, sanitarios, fitosanitarios o ambientales. De esta forma se contribuye a la reducción de los costos fijos asociados a los registros.

A través del **artículo 156** se crea una plataforma unificada de información y gestión de trámites ante BPS, DGI y demás organismos públicos, con el fin de simplificar los requisitos, trámites y habilitaciones que tengan las MiPYMES para operar. El **artículo 157** crea el Sistema integrado de gestión para

MiPyMEs que ofrece tres módulos gratuitos para las micro y pequeñas empresas: sistema de gestión empresarial, facturación electrónica y aceptación de pagos electrónicos. Su creación se encomienda a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en coordinación con la Dirección General Impositiva (DGI). De esta manera se promueve la digitalización de las empresas más pequeñas del país y su adhesión a sistemas eficientes de gestión empresarial.

El **artículo 158** mejora el sistema de acreditación de MiPyMEs, a través de un registro de acceso público y gratuito que incluirá a las empresas así categorizadas. De esta forma las MiPYMES no se ven obligadas a realizar trámites adicionales ante organismos públicos, reduciendo la carga burocrática.

Por último, con el objetivo de mejorar la coordinación de objetivos y recursos orientados a la política de desarrollo de las MiPyMEs, el **artículo 159** adapta las funciones del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y lista taxativamente a los integrantes del Poder Ejecutivo.

#### **4.2) Innovación en instrumentos financieros (artículos 160 a 210)**

El sistema bancario del Uruguay cuenta con una elevada liquidez. El crédito bancario y de administradoras de crédito en Uruguay alcanzó en el año 2025 el 32,5% del PIB y ha mantenido una tendencia creciente desde el año 2006. Sin embargo, es un ratio bajo para un país con las características de desarrollo como las de Uruguay.

Esto implica una restricción dada la relevancia que tiene el crédito como acelerador del crecimiento a través del financiamiento de inversiones, el aumento de la productividad y la creación de empleos. A su vez, fomenta el consumo y la inclusión financiera, contribuyendo a reducir la informalidad y la pobreza.

Las medidas incluidas en esta sección procuran acelerar la innovación en instrumentos financieros que fomenten el acceso al crédito.

Los espacios controlados de prueba son entornos de experimentación supervisada que permiten a empresas innovadoras operar de forma temporal y acotada para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios, bajo condiciones específicas respecto del alcance, duración y número de usuarios. Dichos espacios han demostrado ser herramientas eficaces para promover y acelerar la innovación en el sector financiero, en tanto reducen la inseguridad regulatoria, fomentan el desarrollo de nuevas soluciones financieras, acortan los plazos de innovación y facilitan al regulador un mayor conocimiento sobre nuevos modelos de negocio, tecnologías emergentes y riesgos asociados.



2026-5-1-0007992

Resulta conveniente para el Uruguay contar con un marco jurídico en el cual se establezcan las potestades necesarias para regular, dirigir y supervisar los espacios controlados de prueba, incluyendo la facultad de establecer exenciones normativas temporales, delimitar su alcance, realizar monitoreos permanentes y efectuar la evaluación final de los resultados.

Por estas razones es que en los **artículos 160 a 163** se impulsan espacios de experimentación regulatoria, también conocidos como sandboxes, para el desarrollo de nuevas soluciones financieras, bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU).

Por otra parte, se propone optimizar las fuentes de financiamiento productivo, fomentando la creación y desarrollo de fondos de inversión orientados a canalizar ahorro hacia actividades económicas radicadas en el país.

A través de los **artículos 164 a 183** se adecúa el régimen de fondos de inversión, ampliando el universo de activos elegibles, flexibilizando su estructura jurídica y operativa, eliminando barreras innecesarias para su desarrollo y estableciendo un tratamiento tributario transparente para determinados fondos promovidos.

AL/A-MB

Las modificaciones propuestas buscan profundizar el mercado de capitales uruguayo, diversificar las alternativas de financiamiento de largo plazo para las empresas, especialmente para proyectos innovadores, de expansión productiva e infraestructura, y facilitar la participación de inversores institucionales y privados en instrumentos de financiamiento de la economía real.

Asimismo, la iniciativa procura acercar el marco regulatorio uruguayo a las mejores prácticas internacionales en materia de vehículos de inversión colectiva, favoreciendo una asignación más eficiente del ahorro, reduciendo la dependencia del financiamiento bancario tradicional y generando nuevas herramientas para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible.

Los **artículos 184 a 204** proponen un Sistema de Finanzas abiertas que ha sido promovido por el Banco Central del Uruguay, siguiendo los lineamientos establecidos en la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026–2030 que buscan el fortalecimiento de la interoperabilidad, la seguridad, la competencia y la innovación del sistema financiero y de pagos.

El proceso sostenido de transformación digital de la economía y la sociedad han consolidado los datos financieros como un insumo central para la provisión de servicios más eficientes, personalizados e inclusivos. Este contexto permite priorizar el desarrollo de un Sistema de Finanzas Abiertas que habilite un uso más eficiente, seguro y consentido de la información

financiera, contribuyendo a mejorar los procesos de evaluación de riesgos y ampliación del acceso de personas y empresas al crédito a través de canales formales, especialmente en el caso de usuarios con escasa información crediticia previa.

La evidencia internacional demuestra que las políticas de finanzas abiertas contribuyen a promover la competencia, impulsar la innovación y mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios financieros.

El Sistema de Finanzas Abiertas propuesto comprende la comunicación y el tratamiento de datos financieros y de pagos de los usuarios, así como la iniciación de operaciones, previendo la incorporación progresiva de otros sectores y tipos de datos según la maduración del mercado y la regulación. Los principios rectores del sistema serán el consentimiento informado y la protección de derechos del usuario, trato no discriminatorio, libre competencia, neutralidad tecnológica, interoperabilidad e interconexión, transparencia, seguridad y resiliencia. Es conveniente contar con un marco jurídico que defina estándares técnicos, operativos y de seguridad a efectos de garantizar la interoperabilidad, la protección de los usuarios y la resiliencia del sistema, estableciendo una gobernanza clara que permita coordinar a los distintos participantes y resguardar la seguridad y estabilidad del sistema.

Asimismo, se propone fortalecer el desarrollo de mecanismos alternativos de financiamiento empresarial mediante la promoción de las plataformas de financiamiento colectivo.

Estas plataformas fueron incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, a través de la Ley N° 19.820, del 18 de setiembre de 2019, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento de emprendimientos y empresas de menor porte, permitiendo la participación directa de inversores en el mercado de valores a través de instrumentos simplificados y supervisados por el Banco Central del Uruguay (BCU).

No obstante, la experiencia acumulada desde su creación ha evidenciado la existencia de asimetrías regulatorias y tributarias respecto de otros mercados de negociación de valores, que limitan su desarrollo y reducen los incentivos para emisores e inversores. En particular, diversos beneficios fiscales previstos para instrumentos negociados en bolsas de valores no resultan aplicables a las emisiones canalizadas a través de plataformas de financiamiento colectivo, pese a tratarse igualmente de valores de oferta pública sometidos a supervisión regulatoria.

Los **artículos 205 a 209** procuran corregir dichas asimetrías, adecuando el régimen regulatorio y tributario aplicable a estos instrumentos, ampliando las posibilidades de acceso al financiamiento para empresas y emprendimientos,



2026-5-1-0007992

promoviendo una mayor participación de los inversores y fortaleciendo el proceso de desarrollo del mercado de capitales nacional.

Las modificaciones propuestas se alinean con la política de profundización financiera impulsada por el país, contribuyendo a diversificar las fuentes de financiamiento de la actividad productiva, reducir las barreras de acceso al mercado de valores y generar nuevas oportunidades para el crecimiento de empresas innovadoras y de menor escala.

Por último, el **artículo 210** introduce ajustes al régimen de impatriados con el objetivo de ampliar las alternativas mediante las cuales los beneficiarios pueden canalizar recursos hacia actividades de interés para el desarrollo nacional.

En tal sentido, además de la posibilidad actualmente prevista de realizar aportes a fondos de inversión, se habilita la inversión en otros vehículos destinados al financiamiento de proyectos productivos y de actividades de investigación e innovación aplicadas a la producción. Asimismo, se incorpora la posibilidad de efectuar donaciones a entidades sin fines de lucro que desarrollen proyectos culturales, educativos, científicos, tecnológicos o de innovación.

AL/A-MB

Las modificaciones propuestas procuran fortalecer la capacidad del régimen para atraer personas, capital y conocimiento al país, promoviendo al mismo tiempo una mayor movilización de recursos privados hacia actividades que generan externalidades positivas para el desarrollo económico, la innovación, la formación de capacidades y la creación de valor en Uruguay.

#### **4.3) Financiamiento de la innovación (artículos 211 a 220)**

La innovación constituye uno de los principales motores del crecimiento de la productividad, la diversificación productiva y la generación de empleo de calidad. Sin embargo, los proyectos innovadores suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento, particularmente en las etapas de investigación, validación tecnológica, escalamiento y comercialización, debido a los riesgos, plazos e incertidumbres que los caracterizan. Asimismo, la experiencia internacional demuestra que los ecosistemas de innovación más dinámicos son aquellos capaces de articular eficazmente las capacidades científicas y tecnológicas con las necesidades del sector productivo, facilitando la transferencia de conocimiento, la creación de emprendimientos innovadores y la valorización de los resultados de la investigación.

Las medidas incluidas en esta sección procuran fortalecer el financiamiento de la innovación, mejorar la coordinación de los instrumentos públicos de apoyo a proyectos innovadores, promover la transferencia tecnológica y adecuar el marco normativo de las instituciones públicas de investigación para

facilitar una mayor vinculación entre la generación de conocimiento y el desarrollo productivo del país.

Con el objetivo de fortalecer el financiamiento de proyectos innovadores de alto impacto, el **artículo 211** crea la modalidad de Proyectos Integrales de Innovación e Inversión, destinada a empresas que desarrollen iniciativas de mayor escala y complejidad, combinando actividades de investigación, desarrollo e innovación con procesos de inversión productiva, expansión empresarial e internacionalización.

Los proyectos innovadores atraviesan distintas etapas de desarrollo, desde la generación de conocimiento y validación tecnológica hasta su escalamiento productivo y comercial. Sin embargo, los instrumentos públicos de apoyo suelen encontrarse organizados en forma sectorial o institucional, lo que puede generar procesos de evaluación independientes, mayores costos administrativos y dificultades para acompañar integralmente proyectos de carácter estratégico.

La presente disposición procura superar dichas limitaciones mediante la articulación de los instrumentos administrados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el régimen de promoción de inversiones previsto por la Ley N° 16.906 (COMAP), de 7 de enero de 1998, y otros beneficios e incentivos aplicables, habilitando mecanismos de evaluación coordinada y resolución conjunta.

Asimismo, se promueve una mayor coordinación entre los organismos competentes, facilitando a las empresas el acceso a los instrumentos existentes a través de procedimientos integrados y una visión unificada del proyecto de inversión e innovación.

El **artículo 212** incorpora dentro de los gastos promovidos de investigación y desarrollo aquellos vinculados al uso de laboratorios, plantas piloto e infraestructura científico-tecnológica especializada necesaria para la ejecución de actividades de investigación, validación y escalado preindustrial. La medida busca adecuar el régimen a las modalidades actuales de innovación, facilitando el acceso de las empresas a capacidades tecnológicas especializadas que resultan fundamentales para transformar conocimiento en nuevos productos, procesos y tecnologías con potencial aplicación productiva.

El **artículo 213** procura fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica, valorización del conocimiento y vinculación entre las actividades de investigación, desarrollo e innovación y las necesidades de la sociedad y del aparato productivo nacional.

En este contexto, la presente disposición procura dotar a las instituciones públicas y personas públicas no estatales que desarrollan actividades de



2026-5-1-0007992

investigación e innovación de herramientas adecuadas para facilitar la transferencia de conocimientos, tecnologías y capacidades hacia las actividades productivas y otros ámbitos de interés general, promoviendo una mayor articulación entre investigación, innovación y desarrollo.

Asimismo, la iniciativa incorpora salvaguardas en materia de transparencia, acceso al conocimiento, protección de la propiedad intelectual, rendición de cuentas y prevención de conflictos de interés, preservando el carácter público de la investigación y fortaleciendo su capacidad de generar impactos económicos y sociales.

De esta forma, se busca maximizar el retorno de la inversión pública en investigación, favoreciendo que los conocimientos, desarrollos y tecnologías generados con recursos públicos puedan traducirse en mejoras de productividad, nuevas capacidades tecnológicas, soluciones a problemas relevantes y mayores oportunidades de desarrollo para el país.

Los **artículos 214 a 220** adecuan el marco normativo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) con el objetivo de fortalecer su capacidad para promover la generación, transferencia y valorización de tecnologías aplicadas al sector agropecuario, alimentario y de la bioeconomía.

AL/A-MB

Las modificaciones propuestas actualizan instrumentos de gobernanza, financiamiento y vinculación con el sector productivo, habilitando mecanismos que faciliten la creación y participación en emprendimientos tecnológicos, la administración de activos derivados de actividades de investigación e innovación, la articulación con otros actores del ecosistema de innovación y el desarrollo de nuevas modalidades de transferencia tecnológica.

Asimismo, se incorporan salvaguardas orientadas a asegurar la alineación de estas actividades con los objetivos estratégicos definidos por el Poder Ejecutivo, la adecuada gestión de la propiedad intelectual, la transparencia en la utilización de recursos públicos y la prevención de conflictos de interés.

La medida procura fortalecer la capacidad del país para transformar el conocimiento generado en el ámbito agropecuario en innovación, mayor productividad y desarrollo sostenible, consolidando el papel del INIA como institución clave para la competitividad del sector y la generación de bienes públicos tecnológicos.

#### **4.4) Estímulos sectoriales (artículos 221 a 239)**

La competitividad de una economía depende de factores generales que afectan al conjunto de las empresas, pero también de determinados marcos regulatorios e instrumentos para atender las particularidades y desafíos de sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Uruguay cuenta con actividades que realizan una contribución significativa a la generación de empleo, exportaciones, inversión, innovación y desarrollo territorial. Estas actividades enfrentan permanentemente procesos de transformación tecnológica, mayores exigencias regulatorias internacionales y una creciente competencia global por inversiones y mercados.

Las medidas incluidas en esta sección procuran remover obstáculos regulatorios, modernizar instrumentos de promoción, fortalecer la inversión productiva y generar condiciones más favorables para la inversión en el país, pero también para el desarrollo de sectores con capacidad de contribuir al crecimiento económico.

Con ese objetivo, se introducen adecuaciones en los regímenes de zonas francas, parques industriales y parques científico-tecnológicos, minería, pesca, acuicultura, industria láctea, vitivinicultura e investigación clínica, promoviendo una mayor inversión, innovación, generación de valor agregado y desarrollo de capacidades productivas para el país.

Los **artículos 221 y 222** incorporan cambios al régimen de zonas francas. Particularmente, el **artículo 221** adecúa el régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de las obligaciones de presentación de información por parte de los usuarios de zonas francas, procurando una mejor correspondencia entre la naturaleza de la infracción y las consecuencias jurídicas asociadas a su incumplimiento. La normativa vigente prevé para la falta de presentación de determinadas declaraciones juradas la aplicación de sanciones que pueden afectar significativamente la operativa de los usuarios, aun cuando el incumplimiento tenga carácter meramente formal y no implique necesariamente una vulneración sustantiva de las condiciones de funcionamiento autorizadas. La modificación propuesta procura fortalecer la razonabilidad, proporcionalidad y previsibilidad del régimen, manteniendo los mecanismos de control y supervisión de la Administración, al tiempo que contribuye a reducir contingencias derivadas de eventuales controversias administrativas o judiciales y favorece una gestión más eficiente del régimen de zonas francas. En el caso del **artículo 222**, adecúa el régimen de zonas francas para proyectos turísticos vinculados a actividades de esparcimiento, entretenimiento y servicios, permitiendo que el Poder Ejecutivo pueda habilitar, en casos debidamente justificados, la permanencia y el pernocte dentro de zonas francas temáticas cuando ello resulte inherente a la naturaleza de la actividad desarrollada.

La prohibición general de habitar en zonas francas responde a las características históricas del régimen y continúa constituyendo la regla general. Sin embargo, la evolución de determinados proyectos de servicios hace conveniente prever mecanismos excepcionales y regulados que



2026-5-1-0007992

permitan adecuar el funcionamiento de estas áreas a nuevas modalidades de inversión y operación.

La evolución de los modelos de negocio asociados al turismo, la recreación y el bienestar plantea la necesidad de adecuar determinados aspectos del régimen, preservando sus principios esenciales y las potestades de control y supervisión del Estado.

Los **artículos 223 a 225** introducen adecuaciones al régimen de parques industriales y parques científico-tecnológicos con el objetivo de fortalecer su utilización como herramientas para la atracción de inversiones, la generación de empleo, la descentralización productiva y la incorporación de innovación.

Las modificaciones propuestas procuran dotar de mayor flexibilidad operativa al régimen, facilitar los procesos de habilitación y desarrollo de nuevos parques, y reforzar los incentivos para la radicación de empresas en espacios especialmente diseñados para promover la concentración de actividades productivas, la provisión eficiente de infraestructura y servicios, así como la generación de sinergias entre empresas, instituciones de investigación y organismos públicos.

AL/A-MB

En particular, se habilitan mecanismos que permiten acelerar el desarrollo de nuevos proyectos de parques industriales y se fortalecen los beneficios promocionales para las empresas usuarias.

La medida procura contribuir a una mayor inversión productiva, al desarrollo de capacidades tecnológicas y a una utilización más eficiente de la infraestructura industrial del país, favoreciendo la competitividad y el desarrollo económico territorial.

El **artículo 226** adecúa la definición legal de Minería de Gran Porte con el objetivo de dotar de mayor claridad, precisión y seguridad jurídica a los criterios utilizados para determinar los proyectos comprendidos en dicho régimen.

La experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley N° 19.126, de 11 de setiembre de 2013, ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar determinados parámetros utilizados para la identificación de los proyectos alcanzados, incorporando criterios objetivos vinculados a la escala efectiva de las actividades desarrolladas, la magnitud de las inversiones involucradas y el volumen económico asociado a la explotación. La modificación propuesta procura mejorar la aplicación del marco normativo vigente, facilitando una adecuada identificación de los proyectos comprendidos y fortaleciendo la previsibilidad regulatoria para los distintos actores involucrados, sin alterar las exigencias, mecanismos de control ni demás obligaciones aplicables a la actividad.

La pesca y la acuicultura constituyen una fuente relevante de empleo, exportaciones y desarrollo territorial, enfrentando actualmente desafíos asociados a la evolución de los mercados internacionales, la sostenibilidad de los recursos, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de diversificar especies, productos y modelos de negocio.

Los **artículos 227 a 230** incorporan medidas orientadas a fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación de los sectores pesquero y acuícola, promoviendo la diversificación productiva y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas vinculadas al aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos.

En este contexto, las medidas propuestas procuran estimular la exploración de nuevas pesquerías, facilitar los procesos administrativos vinculados a proyectos de pesca y acuicultura, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la generación de conocimiento e innovación aplicada al sector.

Asimismo, se busca impulsar el desarrollo de la acuicultura sostenible como una actividad con potencial para complementar la producción pesquera tradicional, diversificar la matriz productiva nacional y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y agregado de valor, en línea con las tendencias observadas a nivel internacional.

Las iniciativas incluidas en esta sección procuran contribuir al fortalecimiento de la competitividad del sector, promoviendo su desarrollo sostenible y una mayor capacidad de inserción en mercados nacionales e internacionales.

La cadena láctea constituye una de las principales actividades agroindustriales del país, con una significativa contribución a la generación de empleo, las exportaciones, la agregación de valor y el desarrollo económico de numerosas localidades del interior.

En un contexto caracterizado por una competencia internacional agresiva, con mayores exigencias tanto tecnológicas, como sanitarias y ambientales, y en el que Uruguay se enfrenta a la implementación de nuevos acuerdos comerciales, resulta necesario fortalecer la competitividad de las empresas que integran el sector, particularmente de las de menor escala.

Las medidas incluidas en los **artículos 231 y 232** procuran promover inversiones orientadas a la modernización productiva, la incorporación de tecnología, la sostenibilidad y la adecuación a estándares internacionales, al tiempo que fortalecen los ámbitos institucionales de coordinación y representación sectorial. De esta forma, se contribuye al desarrollo sostenible de la cadena láctea, se fortalece su capacidad exportadora y una mayor generación de valor agregado.



2026-5-1-0007992

El **artículo 233** procura fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), habilitándolo a prestar servicios analíticos especializados a solicitud de terceros y a percibir contraprestaciones por dichos servicios.

La medida permite aprovechar de manera más eficiente la infraestructura, el equipamiento y las capacidades técnicas desarrolladas por el Instituto, facilitando el acceso de productores, empresas e instituciones a servicios analíticos especializados vinculados a la actividad vitivinícola y otras áreas relacionadas.

Asimismo, la iniciativa contribuye a diversificar las fuentes de financiamiento del organismo y a fortalecer su capacidad para brindar servicios de valor agregado sin afectar las funciones de control, fiscalización y regulación que le son propias, ni trasladar costos adicionales a las actividades que constituyen obligaciones legales o regulatorias.

El **artículo 234** introduce una adecuación al régimen de protección de patentes con el objetivo de fortalecer la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual y armonizar determinados aspectos de la normativa nacional con estándares internacionales asumidos por el país. La modificación propuesta procura otorgar mayor certeza jurídica respecto al ejercicio de los derechos derivados de las patentes de invención, facilitando la protección de innovaciones y desarrollos tecnológicos, al tiempo que contribuye a fortalecer las condiciones para la inversión, la investigación y la transferencia de tecnología. Asimismo, la medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de propiedad intelectual, contribuyendo a la actualización y modernización del marco normativo vigente.

AL/A-MB

La investigación clínica es una actividad de alto valor agregado que contribuye simultáneamente al fortalecimiento de los sistemas de salud, al desarrollo de capacidades científico tecnológicas, a la formación de recursos humanos altamente calificados y a la atracción de inversiones vinculadas a la economía del conocimiento. Los ensayos clínicos y demás actividades de investigación clínica permiten a pacientes y profesionales acceder tempranamente a tratamientos innovadores, fortalecen las capacidades institucionales de hospitales, centros asistenciales y equipos de investigación, y generan oportunidades de inserción internacional en redes científicas y tecnológicas de alcance regional y global.

Las medidas incluidas en los **artículos 235 a 239** procuran promover el desarrollo de la investigación clínica en Uruguay mediante la generación de incentivos específicos, el fortalecimiento de capacidades nacionales, la formación de recursos humanos especializados, la promoción de la

cooperación internacional y la integración del país en redes regionales de investigación.

De esta forma, se busca posicionar a Uruguay como un destino atractivo para el desarrollo de estudios clínicos de alta calidad, contribuyendo al desarrollo científico, sanitario y productivo del país, así como a la generación de nuevas oportunidades de inversión, empleo calificado y transferencia de conocimiento.

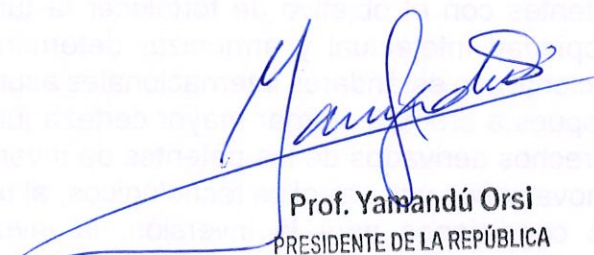
### Disposiciones finales

El **artículo 240** dispone expresamente que ningún mecanismo de estímulo, facilitación, administración y modificación de la presente ley aplica sobre la industria del tabaco y sus asociadas.

Saludan a ese Cuerpo con la mayor consideración y estima,




**VALERIA CSUKASI**



Prof. Yamandú Orsi  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



**FERNANDA CARDONA**



**EDGARDO ORTUÑO**




**LUCÍA ETCHEVERRY**



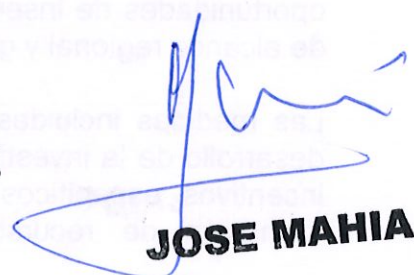
**TAMARA PASEYRO**



**ANA CARAM**



**MATÍAS CARÁMBULA**



**JOSE MAHIA**



Ministerio  
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

  
**GABRIEL ODDONE**

  
**LEONEL BRIOZZO**

  
**CARLOS NEGRO**

  
**SANDRA LAZO**



  
**JUAN CASTILLO**

AL/A-MB

  
**GONZALO CIVILA**

LEONET EMOSSO

HARRIET GOODHUE

BARBARA LANE

ELIZABETH ROBERTS

JOHN CARROLL

JOHN CARROLL